

¿HACIA LA CUARTA ETAPA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN? LA ELECCIÓN INTERNA DE DIRIGENTES DEL PRI EN FEBRERO DE 2002

GUADALUPE PACHECO MÉNDEZ

INTRODUCCIÓN

LAS ÉLITES POLÍTICAS QUE SE ACTIVARON Y SE IMPUSIERON durante la Revolución mexicana y los años subsecuentes encontraron su articulación a través de un instrumento excepcional, el “partido de la revolución”, así llamado por algunos para enfatizar su función cohesionadora de las fuerzas políticas dominantes en México a lo largo de la mayor parte del siglo XX e identificadas con los principios políticos de aquel movimiento. El término de partido de la revolución, a falta de otro mejor, es útil porque engloba las tres etapas por las cuales transitó dicha organización política: como aglutinador de las fuerzas regionales y locales durante los años del Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929; como marco de incorporación de las organizaciones sociales emergentes bajo la égida del Partido de la Revolución Mexicana reestructurado en 1938; y, a partir de 1946, como garante de la disciplina de las organizaciones sociales y de los individuos activos políticamente a la autoridad del presidente de la república, a través de su estructura sectorial y la verticalidad de sus mandos, bajo el nombre de Partido Revolucionario Institucional.

El apoyo del gobierno al partido y el sometimiento a la autoridad presidencial, aunque con algunas variantes y matices, fueron su rasgo y le permitieron imponer su hegemonía electoral durante siete décadas; al término de ellas, en julio de 2000, el partido de la revolución, en su tercera versión, fue derrotado en las elecciones presidenciales. Este acontecimiento cerró todo un periodo histórico tanto en la vida política mexicana como en la trayectoria del partido mismo. Como organización política nacida bajo la protección del gobierno, su estructura de poder tenía su viga maestra en torno del presidente de la república; su derrota en la contienda presidencial fue un golpe que desarticuló uno de los elementos clave para el funcionamiento del PRI durante varios meses (casi año y medio) y abrió una nueva etapa

en la que habrían de empezar a replantearse los fundamentos de su organización interna de poder. Durante ese lapso, las élites que encabezaban los diferentes grupos aglutinados dentro del PRI, una vez pasados los primeros momentos de desconcierto, trataron de ocupar el vacío de poder dejado dentro del partido por la desaparición de la figura de autoridad que representaba la existencia de un presidente de la república priista. Lo que estaba en juego era la supervivencia de la organización como tal, para poder seguir luchando electoralmente por ocupar puestos públicos y cargos de representación popular.

A partir de esa fecha electoral, se abrió una nueva etapa organizativa en la vida interna del PRI, durante la cual debió redefinir las reglas internas del juego y establecer los mecanismos idóneos para elegir a su nueva dirigencia nacional, por primera vez en su trayectoria, ya sin la injerencia del presidente de la república. Esa etapa, naturalmente, no ha concluido aún. En relación con esta problemática, nos interesa abordar en este artículo la evolución organizativa interna del PRI posterior a julio de 2000, enfocándonos especialmente en la organización de las elecciones internas para elegir al nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido efectuadas en febrero de 2002, proceso que se realizó siguiendo los acuerdos emanados de la XVIII Asamblea General de Delegados¹ celebrada en noviembre de 2001. Esa elección interna fue un acontecimiento extraordinario, porque por primera vez en la historia del PRI, y sus antecesores organizativos, una decisión política de esa magnitud fue tomada sin el concurso del presidente de la república. En este sentido, los resultados desglosados de la elección interna nos parecen un indicador valioso.

Analizar un proceso político tan reciente y que, de hecho, aún no ha concluido puede implicar riesgos de ambigüedad en el carácter del estudio. Hasta cierto punto, puede considerarse como un análisis de historia política reciente, pero esta alternativa queda limitada por el hecho de que después del acontecimiento que es el foco de su atención, la elección interna de dirigentes en el PRI en 2002, han ocurrido nuevos e inesperados acontecimientos en esa zaga partidaria, para no mencionar las sorpresas que nos deparen los próximos dos o tres años, que podrían arrojar una luz muy diferente sobre el fenómeno estudiado. En descargo de esta situación, puedo argumentar que desde que empecé a hacer el seguimiento del proceso interno del PRI, a raíz de su derrota presidencial, he observado líneas

¹ La asamblea siempre se denominó en los estatutos como Asamblea Nacional, salvo en esta ocasión, pues, en la modificación de dichos estatutos realizada en 1996, se estableció el término de Asamblea General de Delegados. Ulteriormente, en 2001, durante la XVIII Asamblea se retornó a su tradicional apelativo.

de continuidad en su dinámica interna, y que, de manera clara y constante, se encuentran cohesionados aproximadamente los mismos grupos de actores políticos internos; claro, como en todo proceso de este tipo, ha habido cambios individuales de un campo al otro, pero en lo general los bandos están muy claros desde hace varios años; no hay sorpresas en este sentido.

Desde otra perspectiva, cabría abordar este acontecimiento tan reciente como análisis político de coyuntura, pero entonces el corte en el tiempo adoptado resultaría obsoleto, debido precisamente a la cantidad de hechos que habrán tenido lugar desde febrero de 2002 hasta, por lo menos, los resultados de la elección presidencial de 2006. Aun así, considero que después de 70 años de PRI "presidencial", por así llamarlo, bien vale la pena analizar, *por sí mismo*, el primer gran acontecimiento político interno regido por una dinámica de autonomía partidaria (forzado por las circunstancias, cierto) frente al gobierno federal y en la que, como lo veremos al final de este trabajo, incluso el peso de los gobernadores no fue de la magnitud que hubiera podido esperarse. El estudio de ese proceso interno resulta útil para comprender mejor los eventos posteriores a febrero de 2002. La victoria de Madrazo se traduciría más tarde en su propio fortalecimiento dentro de la estructura del partido, y en contrapeso a la influencia de los gobernadores inicialmente agrupados en torno de Labastida y de Paredes. No fue un suceso menor, ni el PRI ha sido cualquier partido en la historia política contemporánea de México.

En este trabajo partimos de los planteamientos hechos por Panebianco (1993: capítulos 4, 7, 11 y 13). Uno de sus conceptos explicativos clave es el grado de institucionalización interna alcanzado por un determinado partido. Este autor define la institucionalización como el proceso mediante el cual una organización partidaria incorpora en sí misma los valores y fines de sus fundadores. Los factores que estimulan ese proceso son dos: el desarrollo de intereses en el mantenimiento de la organización por parte de los dirigentes y la difusión de las lealtades organizativas; ambos factores están ligados a la formación de un sistema interno de incentivos tanto selectivos como colectivos. A partir de estas ideas, Panebianco desarrolla su argumentación y plantea que, como resultado del proceso histórico de formación organizativa (el tipo de modelo originario) y de las influencias del entorno, los partidos logran un mayor o menor grado de institucionalización. Esta última variable va a determinar el perfil que adquieran, en la fase de madurez organizativa, los componentes de su estructura interna de poder: la coalición dominante o grupo dirigente y el mapa de poder organizativo. A la vez, en este mapa se distinguen dos aspectos, uno se refiere a la jerarquía *real* entre los diferentes cargos, órganos y áreas organizativas internas, y el otro a las relaciones con organizaciones afines externas (por

ejemplo, sindicatos). En pocas palabras, la principal diferencia organizativa entre los diferentes tipos de partidos es el resultado de la institucionalización (fuerte o débil) que hayan logrado alcanzar.

La institucionalización organizativa se mide en varias dimensiones: en primer lugar, en el grado de autonomía o de dependencia del partido con respecto a su entorno externo, es decir, quién controla los procesos de intercambio partido/entorno (es autónomo si sus dirigentes internos controlan los procesos de intercambio con el ambiente; es dependiente cuando los recursos indispensables para su funcionamiento son controlados desde el exterior); a mayor autonomía corresponde una mejor definición de las fronteras organizativas partidarias (modelo cerrado) y una institucionalización fuerte, mientras que a mayor dependencia se da una indefinición de estos límites (modelo abierto) y una débil institucionalización. En segundo lugar, se mide por el grado de sistematización o coherencia estructural interna de la organización; a mayor sistematización, mayor homogeneidad y concentración del control del poder. Por último, su grado de institucionalización organizativa también se calibra con el nivel de interdependencia de las distintas partes de la organización (grado de autonomía o interdependencia de sus subsistemas internos); a mayor autonomía corresponde mayor heterogeneidad y dispersión del control del poder y, por ende, débil institucionalización, mientras que la interdependencia favorece lo contrario.

En el caso específico de aquellas organizaciones políticas que o bien nacieron desde el poder o permanecieron durante un largo periodo en él, Panebianco afirma que dicha circunstancia contribuye también, marcadamente, a generar una débil institucionalización en esos partidos, pues su jerarquía interna de poder está dominada por aquellos miembros que ocupan altos cargos gubernamentales. Agrega que cuando este tipo de organizaciones políticas son desbancadas del poder, a consecuencia de un cambio en el entorno político en el que florecieron “el contexto internacional, la competitividad interpartidaria o algún otro evento de gran impacto en la vida política de su país”, se ven sometidas a un profundo proceso de reforma interna para adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero no hay garantías de éxito: ese proceso puede conducirlos al fracaso y a su desaparición o bien a su reestructuración organizativa y a su supervivencia, según sea el caso. Su débil institucionalización se vuelve un gran obstáculo para superar esa etapa de cambio.

Desde esta perspectiva, el proceso de desarrollo organizativo del partido de la revolución desembocó en una débil institucionalización interna. Esto se debió a que su estructura interna *real* de poder consistía en grupos políticos articulados en sucesivas cascadas de lealtades ordenadas en torno de la autoridad del presidente de la república. Otro rasgo distintivo de la

débil institucionalización del PRI fue el heterogéneo carácter organizativo de sus componentes; en sus filas convivían individuos –aglutinados en las estructuras territoriales y en una parte del sector popular– con organizaciones corporativas –agrupadas en algunos de los tres sectores, cuyas normas internas específicas eran diferentes de las del partido–; esta amalgama se vio sometida a fuertes tensiones derivadas de la denominada “territorialización”² del PRI, promovida por Carlos Salinas durante su presidencia.

No obstante, consideramos que los años que han transcurrido desde que el candidato del PRI Francisco Labastida fue derrotado en la contienda presidencial de julio de 2000, indican que dicho partido ha logrado transitar con relativo éxito hacia una reestructuración organizativa que ha estimulado el inicio de su institucionalización interna: ha despuntado una fase de fortalecimiento de las lealtades hacia el partido mismo y hacia su propia dirección. En otras palabras, el PRI se ha visto obligado a tomar por primera vez sus decisiones políticas sin la injerencia presidencial y ha tratado de superar su carencia de mecanismos *internos reales y efectivos* para elegir a sus dirigentes nacionales; también ha buscado fortalecer la dirección nacional partidaria ante el poder de los gobernadores priistas en funciones, que pasaron a ocupar un lugar en el primer plano después de la derrota de julio de 2000. Más concretamente, a pesar de las dificultades y desventajas, la planilla encabezada por Roberto Madrazo, secundado por Elba Esther Gordillo, logró imponerse sobre unos adversarios que encontraron apoyo en gobernadores priistas fuertes, que se habían identificado más directamente con las políticas neoliberales del gobierno federal durante los años de la administración zedillista, que habían estado más cerca de la camarilla dominante en Los Pinos y que controlaban muchas de las palancas en la cúpula del aparato nacional partidario.

Pero, y este pero lleva una carga muy pesada, no hay que dejar de señalar que ese éxito es parcial y que al PRI aún le queda por recorrer un largo tramo; si en los años por venir logra evitar la fractura organizativa, todavía tendrá por delante la tarea de institucionalizar otros ámbitos de su vida interna. En efecto, aún no se percibe con claridad si se han empezado a homogeneizar sus subsistemas, así como sus procedimientos políticos y administrativos internos, y esa heterogeneidad organizativa es una fuente

² Dicho en pocas palabras, la “territorialización” y luego la “pronasolización” del PRI consistieron en un intento de Salinas por modificar la estructura corporativo-sectorial del partido y sustituirla por otra basada en la organización territorial de sus militantes, articulada por comités de base que se empalmaban con los creados a través del gubernamental Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Este intento provocó fuertes conflictos; aun así, tuvo un éxito parcial y el peso de los sectores resultó fuertemente relativizado, pero no desapareció, ni la heterogeneidad organizativa del partido fue superada.

potencial de conflictos. Menos claro queda el destino de las relaciones entre la estructura partidaria y las organizaciones afines. Lo que desde 2000 hemos venido presenciando es una lucha interna de poder, cuya evolución en determinados momentos o aspectos ha fortalecido las tendencias a la institucionalización, pero en otros ha propiciado lo contrario; hasta ahora, nos parece que han tendido a predominar, aunque precariamente, las tendencias favorables a la institucionalización.

En este sentido, queremos fundar nuestro análisis en la revisión de los acontecimientos que han marcado esta lucha interna y no tanto en la de los cambios en los estatutos partidarios. El problema de analizar la evolución organizativa de un partido con las características del PRI no puede resolverse centrándose exclusivamente en la revisión de los estatutos y en su aplicación formal, ya que en la medida en que la estructura *real* de poder no estaba inscrita de modo explícito en los estatutos (las reglas no escritas), o al menos no la totalidad de ella, éstos no pueden explicar completamente las luchas de poder. Para que la revisión de los estatutos sea fructífera, antes que como factores explicativos, hay que considerarlos como *resultados* de ciertas luchas internas y, en las etapas anteriores a 2000, como resultado de las interacciones entre la élite gubernamental y las cúpulas priistas. Por esta razón, hemos privilegiado el análisis de los principales acontecimientos internos, tratando de seguir las pista a los grupos políticos de poder interno que pasaron a ocupar el primer plano desde la derrota presidencial de julio de 2000, y determinar su peso y su papel en la primera elección interna de dirigentes nacionales sin la injerencia de un presidente de la república priista.

Sobre el PRI se han publicado numerosos estudios que atienden fundamentalmente a su periodo constitutivo y a sus antecesores organizativos (el Partido Nacional Revolucionario fundado, bajo los auspicios de Plutarco Elías Calles, el 4 de marzo de 1929, y su transformación, merced al impulso de los decretos presidenciales cardenistas, en Partido de la Revolución Mexicana en 1938). Sin demérito de los valiosos aportes de numerosos autores a este respecto, aquí sólo haremos mención de aquellos que señalaron puntos de particular interés a la luz de nuestra problemática: los notables trabajos de corte histórico de Medina (1979 y 1994), los ensayos de Córdova (1972) y de González (1981), y de quienes se inclinaron por estudiar su estructura organizativa interna, Furtak (1978) y Cornelius y Craig (1991). Por otra parte, desde un perspectiva diferente, Pacheco y Reyes (1987, 1989 y 1998) dieron seguimiento a la distribución de “cuotas de poder” dentro del PRI, con un sustento cuantitativo, enfoque que fue retomado por Langston (2002).

Entre los trabajos más recientes que enfocaron su atención en la vida organizativa interna del PRI y las tensiones y transformaciones que vivió

desde 1988 y durante la década de los noventa, cuando se consolidó la reorientación neoliberal en la política gubernamental, nos parecen muy sugerentes los de Hernández (1991, 1998, 2000), autor que señaló la existencia de una tensión interna derivada de la existencia de grupos de militantes favorables a la autonomización del partido con respecto al Poder Ejecutivo federal y puso de relieve cómo las reformas impuestas por Salinas al PRI fortalecieron a los grupos regionales encabezados por los gobernadores. Víctor Alarcón (1995) es otro estudioso que ha abordado la problemática interna del PRI en ese mismo periodo. González y Lomelí (2000) publicaron un extenso libro que reúne mucha información y abarca tanto aspectos externos como internos relacionados con el partido desde 1929 hasta 1999, pero sus análisis se ven limitados por la visión oficialista que sustentan sus autores. Los trabajos de Reveles (2003a, 2003b, 2003c), los de Pacheco (2002, 2003, 2004) y el de Corona (2003) resultan de particular interés porque se enfocan en el seguimiento y análisis de la vida interna del PRI en el periodo reciente, incluyendo la etapa posterior a su derrota en la elección presidencial de 2000.

La estructura de este artículo es la siguiente: en la primera parte, a manera de antecedentes, se revisan brevemente las características más generales de la estructura organizativa del PRI y de sus relaciones internas de poder hasta 2000. La segunda parte se centra en la etapa iniciada con la elección presidencial de julio de 2000, y da seguimiento al interregno que va desde julio de 2000, luego de la derrota del candidato presidencial priista, hasta la realización de la XVIII Asamblea General de Delegados, en noviembre de 2001, donde se estableció el método para elegir la nueva dirigencia nacional. La tercera parte corresponde a la preparación y desenvolvimiento de las elecciones internas verificadas en los primeros meses de 2002, hasta la toma de posesión por parte del equipo triunfador. En la cuarta parte se revisan los resultados de dicha elección interna, con el fin de calibrar en qué medida contribuyeron al triunfo de cada bando los componentes más importantes dentro del PRI y aportar elementos para comprender por qué el incremento de la competitividad electoral interpartidaria influyó sobre el establecimiento de una nueva relación de fuerzas entre las filas priistas.

PRIMERA PARTE. EL PRI EN EL PODER

1. El fin del Estado keynesiano y su efecto sobre el legado organizativo del PRI

La problemática política y organizativa que afectaba la vida interna del PRI desde antes de 2000 es compleja y abarca aspectos muy diversos que no es po-

sible examinar aquí con detenimiento. Por esa razón, en este punto nos centraremos en una cuestión que se relaciona directamente con la elección interna de 2002 y que tuvo un papel muy importante en las relaciones internas de poder dentro del PRI en los años recientes: el efecto tanto del ascenso de nuevas élites gubernamentales como de la reestructuración económica, ocurrida durante las dos últimas décadas del siglo XX, sobre la simbiosis entre las políticas públicas de corte keynesiano y las prácticas clientelares del partido y su ideología del nacionalismo revolucionario. Dicho cambio tuvo como consecuencia que las nuevas élites gubernamentales modificaran notablemente su actitud hacia el partido e incluso intentaran sustituir su pautas clientelares y su modelo corporativo por otras características más acordes con la reorientación neoliberal (lo que más tarde, en los años noventa, se denominaría la *territorialización* de la estructura del partido).

Los principales rasgos de las relaciones jerárquicas de poder dentro del PRI, no tanto las descritas en los estatutos sino las realmente operantes, pueden resumirse como sigue, para el periodo 1946-1990: a nivel nacional, en la cúspide del poder priista se encontraba el presidente de la república; las relaciones de dominación/subordinación entre el presidente y los miembros del CEN del partido eran el resultado de las alianzas políticas que habían establecido aquél y diversos grupos políticos, entre los cuales se contaban las cúpulas nacionales de las organizaciones sectoriales.

En un segundo escalón, el correspondiente a los estados y las fuerzas políticas locales, otro rasgo del régimen que afectó la jerarquía del poder interno priista fue la influencia del presidente de la república sobre los gobernadores, o al menos su alianza con éstos; con cada nuevo titular del Poder Ejecutivo federal, dichas influencias y alianzas se acrecentaban conforme iban teniendo lugar las sucesivas elecciones de gobernador en los estados, pues el presidente aprovechaba su posición para apoyar a aquellos políticos que fuesen afines a su proyecto para que ocupasen dichos cargos; de este modo, a través de los gobernadores, se disciplinaba a los priistas locales, tanto en las cámaras legislativas como en los comités directivos estatales del partido. Este punto hay que destacarlo a la luz de los acontecimientos que se desarrollaron en el PRI durante la última década del siglo XX y sus primeros años fuera del poder presidencial.

Otros dos tipos de actores conformaban también ese segundo escalón de la cúspide del poder interno del PRI: por una parte, los líderes más importantes de los sectores y de las principales organizaciones sociales que lo componían; por otra, aunque todavía de manera minoritaria en ese periodo, los actores provenientes de la denominada estructura territorial. Esta última, a su vez, aglutinaba dos tipos diferentes de actores: los vinculados a la burocracia gubernamental federal, en particular al presidente de la

república, y los vinculados a élites regionales, en especial los gobernadores de los estados. Desde su fundación hasta la década de los ochenta, la integración del entonces denominado Consejo Nacional reflejó el supuesto peso relativo de estos componentes sectoriales y territorial, pero en la práctica nunca fueron un centro *real* del poder partidario ni de toma de decisiones, al menos de las más importantes; por su parte, el GEN fue un retablo, aún más fiel, de la estructura sectorial del partido. Esto se explica por el papel que desempeñó el arreglo corporativo que el PRI heredó del PRM, y que sirvió a los presidentes priistas como instrumento para contrabalancear el peso de los intereses regionales representados, casi siempre, a través de los gobernadores y legisladores de mayoría relativa, y para regular a favor propio la tensión centro-estados (Medina, 1994).

Este modelo de organización política se articuló con el paradigma económico keynesiano prevaleciente en la gestión pública. Tras largos años de aplicación de ese tipo de políticas de bienestar, éstas terminaron por echar raíces muy profundas en la visión política de las élites partidarias, tal como señala Pempel (1991) que sucede con los partidos que permanecen largo tiempo en el gobierno. Gracias a que sus rasgos asistencialistas se articularon perfectamente con las prácticas de clientelismo electoral utilizadas en el PRI, esta visión, bautizada dentro del partido con el término de nacionalismo revolucionario, pasó a constituirse en un elemento de identidad política de sus militantes y se empalmó con la definición de los fines organizativos del PRI. De ahí que, a partir de la década de los años ochenta, cuando ocurrió el colapso del Estado benefactor y desde Los Pinos se abandonó la práctica de las políticas públicas basadas en el nacionalismo y el estatismo tan arraigados dentro del PRI, se hayan suscitado divergencias ideológicas entre el partido y el presidente, y que hayan surgido resistencias internas a esos cambios, soterradas primero y abiertas después. La espina dorsal de la identificación ideológica entre el nacionalismo revolucionario enarbolado por las élites agrupadas en el PRI y las políticas públicas se quebró.

Correlativamente, las élites en el poder gubernamental sufrieron una transformación en su composición y en sus mecanismos de reclutamiento político; diversos investigadores (entre otros Baer, 1993; Cornelius *et al.*, 1989; Hernández, 1991; Meyer, 1989) han analizado esta problemática y sus efectos desgastantes sobre la relación entre el presidente de la república y el PRI. Lo anterior se combinó con una modificación en la distribución interna de las "cuotas de poder" (Pacheco y Reyes, 1987 y 1989), que favoreció a la tecnocracia gubernamental. Esto a su vez, como lo señaló Hernández (2000), desencadenaría más tarde una dinámica interna caracterizada por brotes de autonomía entre militantes de ese partido que ya no querían subordinarse a la autoridad del presidente de la república, a la par

que se fueron multiplicando los lazos que unían a esta militancia con los gobernadores priistas.

Lo que importa subrayar aquí es que, como resultado del replanteamiento a fondo del modelo económico a seguir y del impulso que dio la tecnocracia gubernamental a la reestructuración neoliberal, esta élite desmanteló el compromiso histórico sobre el cual se había levantado y asentado durante décadas la hegemonía y la unidad priistas. Así pues, en la última década del siglo XX, la relación entre presidente y partido quedaría sometida a un severo desgaste, a lo cual se aunó el cambio en las condiciones de la competencia electoral, como lo revisaremos a continuación.

2. El PRI ante la apertura de la competencia electoral

En este terreno, las circunstancias políticas y económicas que se desencadenaron en la década de los años ochenta tuvieron como desenlace dramático las elecciones presidenciales de 1988 y la subsecuente crisis político-electoral; a partir de ese momento, el contexto político externo ejerció sobre el PRI presiones cada vez más fuertes que se dejarían sentir en su interior, en particular el ciclo de reformas electorales que culminaría más tarde, en 1996, con la autonomización de las autoridades electorales respecto del Poder Ejecutivo, y que le fue arrancando al tricolor, uno a uno, los privilegios y ventajas de las que había venido gozando, sobre todo las provenientes del gobierno, para mantener su hegemonía electoral.

En un primer momento, el severo revés que significó ese proceso electoral para el PRI, y el debilitamiento político que infligió a Carlos Salinas al inicio de su gestión, condujeron a la élite gubernamental salinista a golpear el viejo cascarón de las organizaciones corporativas, debilitándolas a través de las decisiones adoptadas en la XIV y XVI asambleas nacionales realizadas respectivamente en 1990 y 1993 (Pacheco, 2002). Como resultado de ello, sin embargo, se fortalecieron las posiciones de los poderes regionales, principalmente de los gobernadores priistas (Hernández, 1998). Esta injerencia del gobierno de Salinas en la vida interna del PRI ensanchó aún más el distanciamiento entre amplios grupos del PRI y el ala tecnocrática gubernamental. De esta manera, durante el mandato de Salinas, se empezó a destejer aquel arreglo corporativo heredado del PRM, que tanto había servido a los presidentes priistas como instrumento para contrabalancear el peso de los intereses regionales y de los gobernadores; la vieja tensión centro-estados, que durante los años veinte había atribulado a la política presidencial (Medina, 1994), volvió a emerger. Este debilitamiento de la estructura corporativa del partido liberó de trabas internas la expansión de

la influencia de los gobernadores priistas y de los grupos regionales del poder dentro del PRI, en detrimento de la fortaleza de la dirección nacional, tal como atinadamente lo señala Hernández (1998).

El descontento en el interior del PRI se agravó aún más debido a las desastrosas consecuencias que tuvieron sobre la sociedad las políticas económicas instrumentadas por Ernesto Zedillo cuando fue presidente de la república; dichos problemas se iniciaron desde diciembre de 1994, cuando se desencadenó una aguda crisis económica cuyos efectos se dejaron sentir directamente en las elecciones locales subsecuentes y en la elección federal de 1997, infligiendo severos reveses al viejo partido de la revolución. Más aún, Zedillo mantuvo hacia el partido una actitud ambivalente y aun tortuosa, que variaba en función de sus necesidades de negociación política con los otros partidos presentes en el Congreso; su posición podía oscilar desde su sedicente “sana distancia” con respecto al PRI hasta la utilización descarada de la fracción priista en el Congreso con el fin de imponer su agenda económica y fiscal, integrada por medidas neoliberales que resultaban tan aberrantes para ciertos grupos priistas. Zedillo utilizaba las ventajas de contar con el PRI, pero sin pagar los costos ni cumplir con los compromisos que de ello derivaban. Esta situación incrementó fuertemente la incertidumbre y el malestar dentro del partido. En esas circunstancias, tuvo lugar su XVII Asamblea Nacional, en 1996, en la que se ahondó la fractura entre las élites priistas clásicas y el entonces titular del Poder Ejecutivo, debido a los límites que se le impusieron a este último para designar al candidato presidencial (“los candados”).

En efecto, la vacilante y ambigua actitud de Zedillo hacia el PRI, su desentendimiento del manejo de las palancas del partido y su incapacidad para comprender que, al no asumir el poder dentro del PRI, como en política no hay vacíos que duren, simplemente lo estaba delegando en los gobernadores y grupos políticos regionales más poderosos, fueron, todos, factores que profundizaron la fractura entre el presidente y el partido. Por eso, no resulta sorprendente que en la XVII Asamblea se pusiera un “candado” a la facultad (no escrita, por cierto) del presidente de la república para designar al candidato presidencial del PRI, esto es, a su potencial sucesor como titular del Poder Ejecutivo federal, y se estipulara como requisito para ser ese candidato el haber ocupado previamente un cargo de elección popular. Esta medida eliminó automáticamente a los dos prospectos iniciales de Zedillo; pero, a pesar de ello, éste logró revirar la situación e imponer un mecanismo interno de elección que le aseguró la victoria a su nuevo favorecido, Francisco Labastida, quien había fungido como su secretario de Gobernación, así como colocar en los principales mandos del partido a un mayor número de personas afines (Dulce María Sauri y Esteban Moctezu-

ma en el CEN y numerosos allegados en el Consejo Político Nacional, CPN). Sin embargo, esta vez, el candidato del presidente fue derrotado en las urnas en julio de 2000. Este trasfondo político determinó el desarrollo de los acontecimientos en el partido en el periodo inmediato posterior a julio de 2000, cuando temporalmente se abrió un vacío de poder, luego de la derrota del candidato presidencial del PRI.

SEGUNDA PARTE. EL PRI SIN EL PODER PRESIDENCIAL

1. El interregno, julio de 2000-noviembre de 2001

Los meses inmediatos que siguieron a esa derrota del PRI, de julio de 2000 a febrero de 2001, estuvieron atravesados por fuertes turbulencias internas por apoderarse de la presidencia del partido. Ya desde el 3 de julio, el mismo Zedillo, que alguna vez había proclamado su “sana distancia” respecto del PRI, convocó a los gobernadores priistas para “sugerirles” el nombramiento del nuevo presidente del CEN, Jesús Murillo Karam, ex gobernador de Hidalgo y subsecretario de Gobernación con Labastida, tal como lo consignó la prensa de aquellos días;³ naturalmente, los gobernadores —a quienes aún restaban años de ejercicio, a diferencia del presidente que en cuatro meses terminaría el suyo— se opusieron a esa injerencia; después de todo, el mismo Zedillo había sido el primero en anunciar la derrota de su candidato Francisco Labastida, incluso antes de que terminara el conteo oficial de votos y antes del anuncio oficial del presidente del IFE.

Los bandos que soterradamente se habían venido perfilando dentro del PRI pasaron a ocupar abiertamente el primer plano. Uno de ellos se declaraba más a favor del rompimiento del PRI con el presidente de la república y en él tuvieron un papel muy destacado Roberto Madrazo, todavía gobernador de Tabasco,⁴ José Murat, gobernador de Oaxaca, y Manuel

³ Para algunos, la verdadera intención de Zedillo no era colocar a Murillo, sino que esto era una maniobra de distracción para asegurarle el puesto a Labastida.

⁴ A fines de 1994, la coyuntura política era tensa debido a los acontecimientos en torno de la elección de gobernador en Tabasco, donde triunfó el candidato del PRI, Roberto Madrazo, a pesar de las fuertes protestas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En ese contexto, a principios de 1995, Zedillo convocó al PRI, al PAN y al PRD a la firma de un acuerdo de transición, conocido en la prensa como el “Pacto de Los Pinos”, instrumentado entre la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, para establecer un marco político para la democratización. Esta iniciativa falló debido a la torpeza política mostrada por la administración zedillista al intentar asegurar la participación del PRD a cambio de promover la renuncia del recién electo gobernador priista de Tabasco, que era la condición que el PRD

Bartlett, ex gobernador de Puebla. Esta corriente sería bautizada con el término de *disidente*. El otro bando estaba integrado por aquellos políticos que se habían aglutinado en torno de Labastida, el derrotado candidato presidencial, y de su principal promotor, el entonces presidente Zedillo; de ahí que a esta corriente se la bautizase con el término de *oficialista*.

Al cabo de varios meses, una vez que hubo concluido la gestión del último presidente del siglo XX que arribó a Los Pinos con el emblema tricolor del PRI, los principales exponentes de cada facción partidaria llegaron a un compromiso, el llamado acuerdo de El Caballito, por haberse reunido en la torre conocida por este nombre; tal acuerdo fue sancionado posteriormente por la XL sesión ordinaria del CPN, realizada en Ixtapan de la Sal, a mediados de febrero de 2001. Según dicho compromiso, los mecanismos para elegir al futuro dirigente nacional del PRI serían establecidos por la XVIII Asamblea partidaria, que se realizó en noviembre de ese mismo año de 2001, lo que implicó la permanencia por varios meses más de Dulce María Sauri en la presidencia del CEN del PRI, aunque su rol quedó muy acotado por la creación de la Comisión Política Permanente (CPP) del CPN.

Contrariamente a muchas expectativas y pronósticos,⁵ la reunión del CPN de Ixtapan de la Sal, al lograr sostener y formalizar, de conformidad con los estatutos vigentes, los acuerdos extraoficiales alcanzados en la cumbre de El Caballito, resultó un éxito organizativo y político para las élites priistas, a pesar de que la unidad de su dirigencia se había resquebrajado y se encontraba en proceso de transformación. Los intereses de ambas corrientes lograron conciliarse a través de la negociación y se evitó que la división interna llegase al punto de fractura. Si en aquel momento, bajo las

ponía para suscribir dicho acuerdo. Madrazo simplemente no aceptó renunciar y se enfrentó al presidente de la república en este punto. El fracaso del gobierno federal en su intento por eliminar a Madrazo tuvo dos consecuencias: el PRD se retiró de la mesa del "Pacto de Los Pinos" y la popularidad de Madrazo dentro del PRI creció enormemente por haber resistido abiertamente a la presión para que renunciara a su cargo de gobernador de Tabasco y así haber derrotado políticamente al presidente, quien en ese momento ya era percibido por muchos priistas como el tecnócrata que había establecido su "sana distancia" con el partido que lo había llevado al poder.

Cabe señalar que, en aquel momento, Beatriz Paredes fungía como subsecretaría de Gobernación. Más tarde, durante los días que seguirían a la elección interna, el mismo Madrazo se encargó de recordar no sólo este hecho, sino también que Paredes había negociado las "concertaciones" de las gubernaturas de Michoacán, Chiapas y Guanajuato. Véase la nota informativa publicada en *El Universal* el 22 de febrero de 2002.

⁵ Entre los pocos periodistas que percibieron claramente que la reunión de Ixtapan de la Sal podía ser considerada como un éxito para los priistas, se encuentran Miguel Ángel Ribera, columna "Clase Política", y Julio Hernández, columna "Astillero", *La Jornada*, 19 de febrero de 2002.

condiciones que prevalecían, el CPN se hubiese lanzado a elegir a los nuevos presidente y secretario general del CEN, así como al secretario técnico del mismo consejo, tal como se lo permitían los estatutos entonces vigentes, lo más probable es que se habría desencadenado una fuerte lucha de facciones que habría aproximado más al PRI a la fractura y, en todo caso, los hipotéticos dirigentes electos bajo ese mecanismo se habrían visto con una legitimidad interna sumamente mermada. El desgaste político del PRI se habría incrementado enormemente en esas circunstancias (Pacheco, 2003).

El 26 de mayo de 2001, el CEN emitió la Convocatoria a la XVIII Asamblea General de Delegados,⁶ cuya realización se fijó para los días 17 al 20 de noviembre de 2001, tal como se acordó en el CPN, a propuesta de José Murat. En la víspera de la asamblea, hubo un acuerdo entre Madrazo y Labastida y públicamente coincidieron en que el próximo dirigente nacional del PRI debería ser designado a través de una consulta abierta.⁷ Así pues, en el predictamen de estatutos que se discutiría en la asamblea, aunque el CPN conservó la facultad de determinar qué método de elección de dirigentes se aplicaría (por elección directa, por asamblea de consejeros políticos o por asamblea nacional), también se incluyó la propuesta de que, en esa ocasión, la elección del presidente del CEN del PRI se realizaría a través de una consulta directa a militantes y simpatizantes, es decir, una elección primaria abierta.⁸

Durante las sesiones de la asamblea, los debates decisivos y más enconados fueron los de la mesa de estatutos; allí fue donde tuvo lugar la con-

⁶ Con base en las sesiones XLI ordinaria y XV y XVI extraordinarias del CPN, cuando se acordó formalmente bajo qué términos se celebraría dicho acto. De acuerdo con la convocatoria y el reglamento de la asamblea, los delegados para esta reunión eran muy numerosos: el CPN en pleno, el CEN en pleno, los comités directivos estatales y el del DF en pleno, los secretarios técnicos de los consejos políticos estatales y del DF, los legisladores federales del PRI, cuatro diputados locales de cada entidad federativa, más los delegados electos en las asambleas de cada entidad federativa. Respecto de estos últimos, el reglamento señalaba que las asambleas territoriales estatales y del DF deberían elegir 860 delegados, 774 presidentes de comités municipales (o distritales en el caso del DF), 636 presidentes de comités seccionales y 3 900 delegados escogidos en las asambleas municipales (o distritales federales en el caso del DF). Esto en cuanto a la estructura territorial se refiere, en lo que corresponde a la sectorial, las asambleas estatales del sector obrero elegirían 900 delegados, las del agrario igualmente 900 y las del popular también 900; las asambleas estatales de movimiento territorial deberían elegir 636 delegados, las de organizaciones de mujeres 350 y las de jóvenes 350.

⁷ *Reforma*, 14 de noviembre de 2001.

⁸ El texto del octavo artículo transitorio de los estatutos que posteriormente aprobaría esta asamblea establecía que: "El procedimiento estatutario de elección del Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional será, por esta vez y por decisión de la Asamblea General de Delegados, mediante consulta directa a militantes y simpatizantes en su caso." De acuerdo con los estatutos aprobados en la XVII Asamblea Nacional (1996) sólo el CPN estaba facultado para hacerlo.

frontación entre madracistas y labastidistas por el control del partido. Los ejes de discusión en torno de los cuales se enfrentaron las dos corrientes priistas fueron el método para elegir la dirigencia nacional, el alcance de las facultades del líder nacional del partido, la integración del CPN, la relación entre presidente del CEN, la CPP y el CPN, la distribución interna de los recursos financieros del partido y el manejo de las deudas contraídas durante la campaña electoral de 2000. En términos generales, se aprecia que los labastidistas promovieron propuestas que debilitaban a las autoridades centrales del PRI y favorecían una especie de regionalización de la dirección del partido, mientras que el bando disidente, ya encabezado abiertamente por Madrazo, se inclinaba más por soluciones que tendían a fortalecer el CEN, es decir, el aparato central nacional y la presidencia del partido.⁹ Este punto es sumamente importante, pues deja entrever que también estaba en juego una cierta visión de cómo reestructurar el PRI; quizá sus respectivos portavoces no fueron plenamente conscientes de ello, obnubilados como estaban por la lucha en corto por controlar las palancas del poder partidario, pero, indudablemente, la victoria de uno u otro bando sí implicaba consecuencias organizativas muy diferentes para la reestructuración del mapa de poder dentro del PRI.

Más concretamente, la discusión de los artículos transitorios fue importante, porque eran los que especificaban los términos en que se procedería para elegir la dirección nacional después de esa asamblea; en este aspecto en particular, cabe destacar que las propuestas enarboladas por la corriente disidente desde julio de 2000 fueron las que se impusieron, aunque también hubo propuestas del bando labastidista que fueron adoptadas. En general, en las cuestiones más importantes, las propuestas de la corriente disidente lograron la mayoría, sobre todo en lo que se refiere a los términos concretos acerca de cómo se procedería para elegir la nueva dirección nacional del PRI y esto a pesar de que, al revisarse los nombres de las personas designadas para llevar las riendas de los debates durante la asamblea, destaca de inmediato el control que tenía la corriente labastidista.

Hay que subrayar la relevancia del hecho de que los priistas reunidos en la XVIII Asamblea hayan podido encontrar la vía para modificar y aprobar sus normas estatutarias. Tan sólo el haber logrado tomar esas decisiones, avalarlas por votación de delegados, sin fracturas y sin que mediara ya la autoridad de la figura de un presidente de la república priista, constituyó un gran salto organizativo. Ciertamente no fue un terso debate, pero al final de cuentas todos acabaron por aceptar el resultado. Una vez estableci-

⁹ Un resumen de los principales cambios estatutarios y una comparación con reformas anteriores se encuentra en Pacheco (2002).

das las reglas del juego para la elección de la dirigencia nacional, el siguiente paso fue su aplicación práctica; al término de 2001, dos figuras se perfilaron como los respectivos candidatos de los bandos partidarios, Roberto Madrazo, del disidente, y Beatriz Paredes, del oficialista; ambos habrían de medir sus fuerzas en la elección interna de febrero de 2002.

2. La elección de la nueva dirección nacional, enero-febrero de 2002

Tal y como se acordó en noviembre durante la decimoctava asamblea, por acuerdo del CPN, el CEN emitió, el 20 de diciembre, la convocatoria para la elección interna del PRI. Se presentaron entonces circunstancias que sugieren que los labastidistas “quienes aún conservaban el manejo formal del aparato central partidario (CEN y CPN) que Zedillo les había otorgado” y las cúpulas corporativas nacionales (sector obrero, sector agrario, movimiento territorial y mujeres) intentaron controlar el proceso y su resultado.¹⁰ Varios factores apuntan en ese sentido. En primer lugar, de acuerdo con la convocatoria emitida por el CEN, los requisitos para el registro de candidaturas eran draconianos¹¹ y suponían un amplio apoyo del aparato partidario, lo cual favorecía a Paredes y más tarde daría pie a problemas durante el registro de las planillas contendientes. En segundo lugar, los criterios sobre los que se basaba la integración de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Procesos Internos (CNDPI), que era el órgano partidario encargado de organizar y arbitrar la contienda interna, también resultaban favorables a dicha candidata.¹²

¹⁰ Una nota informativa publicada por *El Universal*, el 9 de enero de 2002, narra que en un encuentro Yarrington le espetó a Madrazo: “Tú tendrás las bases, pero nosotros tenemos las estructuras para cambiar cualquier resultado que te favorezca.” La anécdota fue retomada varios días después por Francisco Cárdenas, en su columna “Pulso Político”, en *El Universal* del 14 de enero de 2002. Veraz o no la anécdota, es ilustrativa de la situación interna y lo cierto es que nunca fue desmentida por los aludidos.

¹¹ Los requisitos para esa ocasión los establecieron el CPN y el CEN, pues en los estatutos no se especificaban. Dichos requisitos se resumen de la siguiente manera: contar con el apoyo de 20% de los comités municipales, distritales o delegacionales del partido distribuidos en al menos 24 entidades federativas; con el apoyo de uno de los tres sectores y organizaciones y con 5% de los consejeros políticos nacionales; además de ello, no desempeñar cargo alguno en la dirección del partido, no ocupar un puesto de representación popular, no ser funcionario público, o bien estar separado de ese cargo en el momento de solicitar registro para participar en la contienda interna; asimismo, había que acreditar una militancia de al menos diez años, estar al corriente del pago de cuotas y haber desempeñado algún cargo en la dirección del partido. Véase *El Universal* del 21 de diciembre de 2001 y *La Jornada* del 12 de enero de 2002, así como los estatutos entonces en vigor.

¹² El presidente de la CNDPI era el senador Humberto Roque, muy cercano a Zedillo cuando éste era presidente y, por ende, de los labastidistas y paredistas; sin embargo, su com-

Y por último, casi inmediatamente después de publicada la convocatoria, empezó a circular información en la prensa¹³ sobre las intenciones de Paredes de participar el día 6 de enero en un acto conmemorativo de la ley agraria de 1915, encabezado por Sauri, al término del cual, según se comentaba en diversos medios priistas, la cúpula nacional de la CNC “destaparía” su candidatura, es decir, haría público su apoyo a la hasta ese momento diputada federal y presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para contender por la presidencia del partido.¹⁴ Y así sucedió: dos semanas más tarde, el acto agrarista del 6 de enero se transformó en el del lanzamiento de la candidatura de Beatriz Paredes, y no sólo estuvo encabezado por la presidenta del partido, sino que también estuvieron presentes el secretario general Rafael Rodríguez Barrera y varios gobernadores de la corriente oficialista, entre ellos, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Fernando Moreno de Colima y Fernando Silva de San Luis Potosí. Durante ese acto, incluso se distribuyó el instructivo de movilización para la campaña paredista.¹⁵

Sin embargo, a pesar de las ventajas a favor de su candidata, Beatriz Paredes, por una combinación de consideraciones internas y externas, el bando labastidista fue, al parecer, el primero en plantear la necesidad de buscar una “candidatura de unidad” y así cancelar la elección interna.¹⁶

portamiento indica un cálculo a fin de mantenerse discretamente a favor de quien tuviese la mayor fuerza en las sucesivas coyunturas que se fueron presentando. La comisión estaba conformada por representantes de los tres sectores: por el obrero, Leonardo Rodríguez Alcaine, quien apoyaba a Paredes; por el agrario, Heladio Ramírez, líder de la CNC, a favor de Paredes; por el sector popular, Elba Esther Gordillo, quien fue sustituida por su cercano seguidor Roberto Campa Cifrián y quien se alió con Madrazo. También la integraban representantes de las siguientes organizaciones priistas: del Movimiento Territorial, Carlos Flores Rico, paredista; del Organismo Nacional de Mujeres, Carla Aguilera, paredista, y del Frente Juvenil Revolucionario, Alejandro Guevara, madracista. Jaime Aguilar, como representante de Paredes, y Miguel Ángel Yunes, como representante de Madrazo, también formaron parte de la comisión. Véase *El Universal* del 2 de enero de 2002.

¹³ *El Universal* del 23, 24 y 25 de diciembre, en especial la columna “En la Línea” de Félix Fuentes, publicada el día 23.

¹⁴ Esos mismos días, también aparecieron varias notas sobre las pretensiones del entonces secretario general del CEN del PRI, Rodolfo Echeverría, para postularse de nuevo a dicho cargo, a pesar de que los estatutos prohibían la reelección.

¹⁵ *El Universal*, 7 de enero de 2002.

¹⁶ Desde los primeros días de enero se realizaron sucesivas reuniones entre los gobernadores priistas y ambos contendientes con dicho objetivo. Pero la información de prensa no detalla la secuencia completa de esas reuniones, aunque sí se dan a conocer algunos hechos, principalmente el de que no llegaron a ningún acuerdo, pues las propuestas iban en el sentido de eliminar a Roberto Madrazo y su corriente de los principales cargos. Notas informativas en *El Universal*, *Reforma* y *La Jornada* entre el 5 y el 10 de enero de 2002.

Entre las primeras, cabe mencionar la intención de evitar el desgaste interno del PRI y, entre las segundas, la necesidad de prepararse para capear la tormenta que se anunciaba para el PRI con el asunto del “pemexgate”;¹⁷ estos hechos no estaban inconexos entre sí, pues el asunto del desvío de recursos de PEMEX, vía el sindicato petrolero, hacia la campaña presidencial del PRI, afectaba principalmente a los labastidistas y a Beatriz Paredes, quien había formado parte de la coordinación nacional de esa campaña. Aunque ambos bandos debatieron mucho sobre quién había lanzado primero la iniciativa de cancelar la elección interna, estas circunstancias apuntan a que fueron los partidarios de Paredes los que tenían mayor interés en que así fuese.

El miércoles 9 de enero se inició abiertamente la disputa por la dirección nacional del PRI. Esa noche, 16 de los 18 gobernadores priistas (faltaron Tomás Yarrington y José Murat) sostuvieron una reunión con Madrazo y Paredes con el fin de negociar una candidatura única; algunos paredistas incluso propusieron una tercera opción, pero se limitaron a proponer dos nombres de su propio bando, por lo que esa alternativa fue desechada. Esta reunión fue un indicador de las preferencias de los gobernadores;¹⁸ siete apoyaban a Roberto Madrazo y los once restantes, cuyos estados eran los de mayor peso electoral, se inclinaban por Beatriz Paredes. Los mandatarios que apoyaban al primero eran José Murat de Oaxaca, René Juárez de Guerrero, Juan Millán de Sinaloa, Manuel Andrade de Tabasco, Antonio González Curi de Campeche y Joaquín Hendricks de Quintana Roo; un séptimo mandatario, Víctor Manuel Tinoco Rubí de Michoacán, también lo apoyaba, pero su gestión estaba por concluir y pronto sería sustituido en su cargo por un perredista. Los paredistas eran Arturo Montiel del Estado de México, Miguel Alemán de Veracruz, Melquíades Morales de Puebla, Armando López Nogales de Sonora, Fernando Moreno Peña de Colima, Tomás Yarrington de Tamaulipas, Fernando Silva de San Luis Potosí,

¹⁷ El inicio de la contienda interna por conducir los destinos del PRI quedó enmarcado por el estallido, pocos días antes, del llamado “pemexgate”, un escándalo relacionado con la transferencia de recursos de PEMEX a la campaña presidencial de Labastida y que tendría, más tarde, muy costosas consecuencias financieras para el PRI. En mayo de 2003, el Tribunal Federal Electoral ratificó la decisión del IFE de sancionar al PRI por no haber reportado el ingreso de quinientos millones de pesos provenientes de PEMEX. La multa al PRI ascendería a mil millones de pesos. Al parecer, dichos recursos no ingresaron directamente al partido a través de la Secretaría de Finanzas, sino que fueron canalizados a la coordinación de campaña de Labastida, cuyas finanzas estaban a cargo de Eduardo Bours, un dirigente empresarial que luego sería lanzado como senador en 2000 y más tarde, en 2003, como gobernador de Sonora. Bours ha sido uno de los más conspicuos opositores de Madrazo y su corriente.

¹⁸ Columna “Fray Bartolomé” del diario *Reforma*, 10 de enero de 2002. En ese periódico, véase la nota informativa del 13 de enero, así como un artículo publicado en el suplemento *Enfoque* de esta misma fecha.

Patricio Martínez de Chihuahua, Manuel Ángel Núñez Soto de Hidalgo, Ángel Sergio Guerrero Mier de Durango y Enrique Martínez de Coahuila. Los 14 gobernadores de las entidades federativas no mencionadas llegaron al cargo postulados por el PAN o por el PRD.¹⁹

El 10 de enero, Roberto Madrazo registró su candidatura a la presidencia nacional del PRI, en planilla con Elba Esther Gordillo “hasta ese momento secretaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP)²⁰ y ex secretaria general del SNTe” como candidata a la secretaría general; ambos acudieron a la sede nacional del PRI acompañados de un relativamente modesto grupo de seguidores; su trámite no estuvo exento de problemas pues, en sentido estricto, al parecer no cumplían con los requisitos de la convocatoria, pero, como estatutariamente no había nada estipulado, Humberto Roque optó por la salida “política” y los registró. Paredes, representando al bando labastidista, pidió licencia temporal para retirarse de su cargo en la Cámara de Diputados a partir del 12 de enero, último día para el registro de candidatos; en esta fecha, junto con su compañero de fórmula, Javier Guerrero (un hombre poco conocido que había sido secretario de finanzas del gobierno de Coahuila), acudió a la sede nacional del PRI para registrar su planilla, en medio de un multitudinario acto al más clásico estilo priista (una “cargada”). Paredes designó como coordinador de su campaña al hasta ese momento secretario general del partido Rodolfo Echeverría; también Madrazo dio a conocer su equipo de apoyo.

A pesar de lo que parecía ser el apabullante peso de los paredistas, por lo menos entre los gobernadores y el aparato nacional partidario, hubo indicios que hacen dudar de la magnitud de su arrastre dentro del PRI. Ciertamente, a juzgar por sus posiciones en las cabezas del aparato, proyectaban la imagen de tener el control de la mayoría; sin embargo, no parecían estar del todo seguros de la amplitud del apoyo que lograrían construir entre las bases priistas, que al final de cuentas serían las que elegirían la nueva dirección nacional durante este proceso de elecciones abiertas. Un indicador, en este sentido, es el hecho de que ninguna figura importante del partido, ningún legislador y mucho menos ningún gobernador quiso lanzarse como candidato a secretario general en la planilla encabezada por Paredes,²¹ motivo por

¹⁹ Por el PAN, eran los mandatarios de los estados de Baja California, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Aguascalientes y Yucatán; por el PRD, los de Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, Chiapas y Nayarit, así como el jefe de gobierno del Distrito Federal.

²⁰ Gordillo renunció a su cargo ese día y fue sustituida interinamente en la CNOP por Roberto Campa, quien fue “designado” por el consejo de esa organización, lo cual provocó protestas en su interior.

el cual se incluyó, a la última hora, a Javier Guerrero, como ya se dijo, un desconocido para la élite priista nacional y que con dificultades pudo demostrar los años de militancia que exigía la convocatoria.

Sea como fuere, nuevos acontecimientos vendrían a socavar la seguridad del bando paredista. El 19 de enero y los días subsecuentes, arreció el escándalo en torno del “pemexgate”, lo que amenazaba la candidatura de Paredes; fue de tal magnitud el asunto, que la noche del 23 de enero Sauri y varios gobernadores priistas de ambos bandos²² se reunieron para discutir de nuevo el aplazamiento de la elección interna, pero Madrazo y sus seguidores fueron muy reticentes en aceptar tal propuesta. Así, el 24 de enero, apenas a 12 días de iniciado el proceso interno y a dos meses de los acuerdos de la XVIII Asamblea Nacional, integrantes del grupo paredista siguieron insistiendo en que se abriera una tregua y que se suspendiese la elección interna o que se llegara a un acuerdo de candidatura única;²³ con ese motivo, tuvo lugar otra reunión más amplia, con la participación de gobernadores, miembros del CEN, coordinadores legislativos y dirigentes de las organizaciones y sectores, así como de Madrazo y Paredes; la propuesta de “tregua” no prosperó porque varios de los gobernadores presentes, entre ellos Murat, defendieron la fecha establecida por la asamblea nacional, mientras que Alemán y el senador Enrique Jackson defendieron sin éxito la otra propuesta.²⁴

La última semana de enero y las dos primeras de febrero transcurrieron con los consabidos jaloneos y recriminaciones de ambos bandos por el tipo de recursos de que se valía uno y otro durante su campaña proselitista. Ya en la víspera de la jornada electoral priista, las tensiones se intensificaron por varias razones. La primera de ellas fue que se reavivó el escándalo en torno del “pemexgate”, a partir del 16 de febrero, cuando la Procuraduría General de la República hizo pública la información pormenorizada de los

²¹ Declinaron la oferta: Rodolfo Echeverría, secretario general (al renunciar a este cargo para ocuparse de la coordinación de la campaña de Paredes, fue sustituido por Jesús Murillo); Dióodoro Carrasco, ex secretario de gobernación; Heladio Ramírez, líder nacional de la CNC; Carlos Rivera, ex gobernador interino de Jalisco; Carlos Flores Rico, líder del Movimiento Territorial; Manuel Bartlett, senador, y Emilio Chuayfett, diputado federal. Véase *El Universal*, 9 de enero de 2002.

²² Según *La Jornada* del 24 de enero de 2002, acudieron los mandatarios de los estados de México, Veracruz, Hidalgo y Coahuila, que apoyaban a Paredes, y los de Oaxaca y Tabasco, quienes se alineaban con Madrazo.

²³ El día 27, Paredes negó que ella o su equipo hubiesen solicitado la suspensión de la elección interna. Sin embargo, la lógica de los acontecimientos y la inveterada costumbre de los políticos priistas de negar hechos reales con el fin de encubrir las disputas internas apuntan en el sentido de que esa maniobra sí provino de los paredistas.

²⁴ *Reforma*, 25 de enero de 2002.

movimientos de dinero relacionados con ese asunto.²⁵ A ello se aunó la divulgación de la noticia según la cual, a principios de ese mismo mes, Madrazo y Gordillo habrían sostenido una reunión privada con el presidente Vicente Fox para ofrecerle el pacto de gobernabilidad en la Cámara de Diputados que Paredes no había podido asegurar en diciembre de 2001.²⁶ Diversos observadores y, desde luego, los paredistas mismos, consideraron que Fox estaba utilizando el asunto del desvío ilegal de recursos de PEMEX hacia la campaña presidencial de Labastida con el objeto de influir en la contienda interna del PRI, y que la reunión de principios de mes había tenido como objetivo tejer un triángulo de apoyo a la mancuerna Madrazo-Gordillo vía el entonces canciller Jorge Castañeda.²⁷ Acuerdo de por medio o no, dado que las propuestas que Fox había enviado a la Cámara no pudieron conjuntar el apoyo de los legisladores panistas y priistas para ser aprobadas, su administración ya no tenía ninguna razón para no atacar a fondo al PRI con el asunto de PEMEX, cuyo expediente había esperado paciente-mente más de seis meses en el escritorio del presidente de la república.²⁸

Otra fuente de tensión estuvo generada por la insistencia de los paredistas en anunciar, desde días antes de la elección, un “albazo” por parte de Madrazo si no resultaba triunfador. En la víspera de la elección, la noche del 23 de febrero, se dejó correr el rumor de que Madrazo tenía preparada una toma de las instalaciones del PRI, en caso de no resultar ganador, con el propósito de “reventar” la elección; verdaderas o no esas intenciones, el hecho es que Beatriz Paredes sí pidió a Sauri y a Roque que solicitasen al gobierno del Distrito Federal y al gobierno federal el resguardo policiaco de las mesas receptoras de votos; y, en efecto, Roque admitió el envío de misivas a cada uno de los mandatarios de las entidades federativas, así como el haberse comunicado con el secretario de Gobernación para informarle

²⁵ *La Jornada*, en su edición del 16 de febrero de 2002, publicó una nota informativa muy completa sobre esta cuestión.

²⁶ Notas informativas del 24 y 25 de febrero de 2002 publicadas por *La Jornada*. Por otra parte, en *El Universal*, Raymundo Riva Palacio, en su columna “Estrictamente Personal” del 27 de febrero, abundó al respecto.

²⁷ Además, según una versión periodística, en diciembre de 2001, la cúpula del PRI había buscado a Fox para negociar la reforma fiscal y le ofrecieron el voto a favor de la reforma hacendaria y de la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) sobre alimentos y medicinas a cambio de acallar el escándalo del financiamiento ilícito de PEMEX a la campaña de Labastida (véase *La Jornada* del 24 de enero de 2002). Según otra versión similar, la de Francisco Cárdenas Cruz, en su columna “Pulso Político” de *El Universal* del 25 de enero de 2002, Paredes se comprometió (y falló) con Hacienda a que se aprobaría la aplicación del IVA.

²⁸ Al parecer, desde el verano de 2001, de acuerdo con la amplia información dada a conocer por Ricardo Alemán, en su columna “Itinerario Político”, *El Universal*, 29 de enero de 2002.

que, en caso extremo, solicitaría le intervención de la Policía Federal Preventiva para resguardar las instalaciones del PPI.²⁹

Esta secuencia de acontecimientos sugiere que el grupo que apoyaba a Paredes, compuesto principalmente de antiguos labastidistas, sí quería evitar la realización de la elección interna; es probable que haya considerado innecesario arriesgarse en un proceso interno, cuando aún tenían el control formal del aparato que habían heredado de Zedillo. Así, ante la eventualidad de perder dicho control, intentaron estrategias para eludir una prueba en la que tenían que medir sus fuerzas políticas y organizativas reales, independientemente de que ambos bandos hiciesen el uso de los métodos electorales tradicionales que habían caracterizado al partido. Al menos esa conclusión parece desprenderse de un conjunto de hechos que precedieron al proceso interno priista: primero, ese grupo promovió desde enero la idea de un candidato de unidad; luego, con motivo del “pemexgate”, intentó posponer las elecciones e incluso cancelarlas; más tarde, ya en la víspera misma de la elección, por medio de declaraciones de sus principales cabezas, imbuyó en el ambiente la idea de que Madrazo quería reventarla, pero simultáneamente intentó negociar con el aguerrido José Murat el resultado de los comicios en esa entidad para asegurarse el triunfo en los comicios nacionales.³⁰

Así las cosas, por fin, el domingo 24 de febrero de 2002 se realizaron las elecciones internas del PRI para elegir su nueva dirigencia nacional. Fueron sus primeras elecciones libres de la tutela presidencial. Los métodos de movilización de electores por parte de ambos contendientes no divergieron mucho de los que tradicionalmente utilizaba el PRI en cualquier proceso electoral externo,³¹ lo cual no resulta sorprendente cuando se piensa que al final de cuentas eran los mismos actores y maquinarias electorales los que ahora se habían activado para una elección interna. A lo largo de la jornada hubo diversos escarceos entre ambos bandos, pero la tensión política empezó a manifestarse con fuerza creciente al cierre de las mesas receptoras de votos, a las seis de la tarde de ese día.

A partir de ese momento, empezó la guerra de cifras y la discusión en torno de los resultados. Paredes centró su estrategia en dos elementos: uno,

²⁹ Diversas notas informativas publicadas en *La Jornada* el 24 de febrero de 2002.

³⁰ El día anterior a la elección, sábado 23 de febrero, Levín Coppel y Gómez Villanueva viajaron a Oaxaca para llevarle al gobernador Murat la propuesta de Paredes de “negociar” el resultado de la elección, a fin de que quedara en 60-40 por ciento a favor de la fórmula Madrazo-Gordillo y no en 80-20 por ciento, como se preveía. Obviamente, la propuesta fue rechazada. Francisco Cárdenas Cruz, “Pulso Político”, *El Universal*, 27 de febrero de 2002.

³¹ El reportaje del diario *Reforma*, del día 25 de febrero de 2002, ilustró profusamente dichas prácticas.

el supuesto intento de Madrazo de “reventar” la elección y, el otro, la insistencia en anular los resultados de Oaxaca y Tabasco. Madrazo enfocó la suya en reunir rápidamente las copias de las actas levantadas en las mesas receptoras para demostrar y proclamar con la mayor anticipación posible su triunfo (“acta mata rollo”, como lo resumiría más tarde uno de sus seguidores), amén de presionar a la CNDPI para que diera a conocer los datos del programa de resultados preliminares (PREP) del PRI.³² Por su parte, Humberto Roque dio a conocer, poco antes de las diez de la noche, los resultados de un conteo rápido, según los cuales la diferencia entre ambos contendientes era tan estrecha que sólo se podía hablar de un “empate técnico”.³³

Durante la larga noche que siguió al anuncio del “empate técnico” se entretejieron diversos eventos controversiales. Casi al mismo tiempo que los madracistas proclamaban su victoria basados, al decir de ellos, en 87% de las actas y los paredistas, por su lado, anunciaban su propio triunfo basados en una muestra de 100 mesas receptoras, un grupo compuesto por alrededor de 350 personas, que gritaba consignas a favor de Madrazo, irrumpió, hacia las diez de la noche, en la sede nacional del PRI en Insurgentes Norte para manifestarse en la explanada situada entre el edificio viejo y los dos nuevos, para luego empezar a retirarse a las once y media, sin haber hecho ninguna tropelía.³⁴ Humberto Roque ordenó la salida de todo el personal,

³² Alrededor de la 19 horas del domingo, luego de que se iniciara la difusión de resultados de encuestas de salida de casilla y de conteos de votos que daban la ventaja a uno o a otro de los contendientes, los madracistas, por voz de Miguel Ángel Yunes y de Carlos Jiménez Macías, quienes fungían como portavoces oficiales de la planilla Madrazo-Gordillo, se centraron en la defensa de sus cifras y de la ventaja de Madrazo, basados en el elevado número de copias de actas que ya tenían reunidas, y lanzaron un ultimátum a la CNDPI y a Humberto Roque para que “en una hora”, a las 20:30, se empezara a difundir los datos de la elección conforme fueran afluyendo en el programa de resultados preliminares del PRI. Como colofón de ello, añadiría Yunes: “De no hacerlo así [...] nos veremos obligados a dar a conocer la abundantísima información que hemos venido recabando [...] acta mata rollo [...] y las actas nuestras sepultarán los rollos de quienes trataron de sorprender con datos en los estados.” *El Universal y La Jornada*, 25 de febrero de 2002.

³³ Poco después de las declaraciones de Yunes y Jiménez, el mismo presidente de la CNDPI afirmó, a las 21:45, que, de acuerdo con los resultados del conteo rápido que el partido había encargado a Warren Mitofsky, la diferencia entre ambas planillas era de menos de un punto porcentual, ya que el rango dentro del que oscilaba la votación favorable a Madrazo era de 47.8 a 51.6%, mientras que el de Paredes era de 48.4 a 52.2%, por lo cual anunció que había un “empate técnico”, y añadió que en esas condiciones era imposible definir un ganador hasta que no se contara el último de los votos y que, dada la lentitud del flujo de la información, quizá sólo hasta el mediodía del lunes podría saberse quién era el vencedor.

³⁴ Según las notas informativas de *Reforma* del 25 de febrero, ese grupo estuvo encabezado por un cenecista, Fidencio Luna, lo que sugería una maniobra paredista, mientras que para la columna “Itinerario Político” de Ricardo Alemán, en *El Universal* del 26 de febrero, ese grupo estuvo manipulado por los madracistas a través de Gustavo Carbajal Moreno.

lo que implicó que, a las 23:00 horas, se “interrumpiera el flujo de la información” durante una hora; al restablecerse el sistema de información, las nuevas cifras que mostraban las pantallas ya no favorecían a Madrazo sino a Paredes.³⁵ La cuestión del grupo que entró en la sede del PRI suscitó acusaciones mutuas de los adversarios. Como esas personas entraron gritando consignas favorables a Madrazo, la reacción inmediata de Paredes, Oscar Levín y otros de sus seguidores fue la de declarar que “como lo habían venido repitiendo desde el día anterior, en una especie de profecía que espera autocumplirse” temían que Madrazo intentara un “albazo” o “una toma del partido” o bien que “reventara la elección”.

Más tarde, en un improvisado debate vía telefónica, que fue transmitido por TV Azteca poco antes de la medianoche, Paredes acusó a Madrazo de haber organizado ese asalto al partido, denunció el triunfalismo precipitado de éste y afirmó que, según sus datos, ella iba arriba. Madrazo rechazó la primera acusación y sostuvo que la toma del partido era un montaje de los paredistas, denunció la “caída” del PREP y los cambios en los resultados, y terminó por afirmar que disponía ya de 92% de las copias de las actas, cuyo cómputo le daba una ventaja de 70 000 votos, por lo que propuso a su contrincante: “confrontemos tus actas con las mías y las de la Comisión Nacional para el Desarrollo del Proceso Interno, voto por voto, hasta determinar quién ganó”. Desafío que su adversaria eludió. Pero las dificultades del sistema de información continuarían: a las tres de la mañana, el programa de resultados preliminares “se cayó” de nueva cuenta; se recuperó alrededor de las seis con una amplia ventaja a favor de Beatriz Paredes. Luego se volvió a detener la información entre las nueve y las diez del lunes, pero eso no impidió que, a las siete de ese día, un noticiero de Televisa informase, con datos supuestamente filtrados por la cúpula del PRI,³⁶ que, con la mitad de las actas contabilizadas, Paredes iba ganando.³⁷

Aunque el domingo por la noche Humberto Roque, en su rol de árbitro de la contienda interna, anunció el “empate técnico”, los indicios no sugieren equidad: además de que la composición de la CNDPI favorecía al bando de Paredes, la conducta del presidente de ese órgano fue incierta y no quedó claro su papel en las diversas caídas del sistema durante el trans-

³⁵ Justo antes de la primera “caída” del sistema, hacia las 11:30 de la noche, el conteo de votos del PRI anunciaba una contienda cerrada y en ese momento registraba 549 702 votos a favor del tabasqueño y 535 266 sufragios para la tlaxcalteca. *Reforma*, 25 de febrero de 2002.

³⁶ Félix Fuentes, columna “En la Línea”, *El Universal*, 26 de febrero de 2002.

³⁷ La nota de Fabiola Guarneros, Jorge Terán y Jorge Ochoa, en *El Universal* del 27 de febrero de 2002, reúne información muy detallada sobre las sucesivas dificultades del sistema de cómputo del PRI. La nota de Enrique Méndez y Renato Dávalos, publicada ese mismo día en *La Jornada*, también es prolífica.

curso de la noche del domingo al lunes; así parecen sugerirlo las extrañas coincidencias en las variaciones en los resultados, la lentitud con que fluyó la información de algunos estados y la reticencia con que se dieron a conocer los agregados nacionales en determinados momentos; tampoco desmintió la acusación que se le hizo de intentar anunciar, a la mañana siguiente, la victoria de Paredes.

En efecto, hacia el mediodía del lunes 25, Roque había convocado a una conferencia de prensa en la sede nacional del PRI en la que pretendía, al decir de algunos comentaristas, declarar vencedora a Beatriz Paredes, con el argumento de que, con alrededor de 70% de las actas computadas por el partido, su ventaja era irreversible, pero que se contuvo de hacerlo cuando recibió una advertencia de Madrazo.³⁸ Lo cierto es que al término de una sesión de la CNDPI, Roque salió a anunciar a la prensa que sólo hasta el miércoles se darían resultados definitivos. Poco después, Madrazo habló con Roque para pedirle celeridad en la entrega de resultados y, como consideró que no le hicieron caso, a las tres de la tarde, en una conferencia de prensa, anunció su triunfo, basado en 97% de las actas, según afirmó, adelantándose así al cumplimiento formal del proceso (un "madruguete").

Pero la guerra de datos, de descalificaciones mutuas y de amenazas de impugnación continuó todo el día siguiente, martes 26 de febrero. A pesar de eso, diversos acontecimientos sugieren que en los altos círculos del PRI parecía haberse aceptado ya la victoria de la mancuerna Madrazo-Gordillo. Varios hechos apuntan en esa dirección. En primer lugar, a las diez de la mañana se cerró el PREP con datos que daban a Madrazo una ventaja de 42 045 votos.³⁹ Segundo, aunque Paredes y sus seguidores insistían en que se anulaban los resultados de Oaxaca aduciendo que había habido fraude, su posición no parecía muy sólida, pues en sendas declaraciones, los madracistas Carlos Jiménez Macías en México y Ulises Ruiz en Oaxaca afirmaron, desafiándolos, que Oaxaca no estaba sujeta a negociación, ya que, de las 622 actas, en 574 estaba estampada la firma de los representantes paredistas.⁴⁰

³⁸ En una llamada telefónica, Madrazo le advirtió: "Ten cuidado con lo que vas a decir. Tengo las actas. Piensa bien lo que vas a decir." Francisco Cárdenas Cruz, columna "Pulso Político", *El Universal*, 27 de febrero de 2002. Véase también la nota informativa de ese mismo diario, del 26 de febrero.

³⁹ Las últimas cifras en la pantalla contabilizaban 87.98% de las actas; los subtotales eran: 1 379 782 votos para Madrazo-Gordillo y 1 337 737 para Paredes-Guerrero.

⁴⁰ *La Jornada*, 27 de febrero de 2002. Por su parte, en conferencia de prensa, el senador oaxaqueño madracista Ulises Ruiz declaró: "ellos apostaron la vida al Estado de México, pero Montiel fracasó y César Augusto Santiago se jubiló en esta elección [...] empiezan a enloquecerse cuando se percatan de que las cuentas no les salen, donde les sobraron microbuses, pero vacíos. Nosotros no retacamos urnas, simplemente tuvimos capacidad de movilización.

Tercero, al final de la tarde, se reunieron seis gobernadores paredistas (Silva Nieto, Moreno Peña, Alemán, Guerrero Mier, Yarrington y Montiel),⁴¹ cerca del aeropuerto de Toluca, para discutir la viabilidad de anular la elección priista y analizar las impugnaciones de Oaxaca y Tabasco, y acordaron impulsar una fase de “reconciliación interna”; presumiblemente, como resultado de esa reunión, diez gobernadores priistas, entre los que ya se contaban los madracistas González Curi y Manuel Andrade, enviaron un escrito al CEN del PRI y al presidente de la CNDPI,⁴² donde se pedía el desahogo de todas las impugnaciones con el fin de salvaguardar la legalidad del proceso interno. Cuarto, esa misma noche, 24 entidades completaron el cómputo de sus votos y, a pesar de que en estados decisivos por su peso electoral y su importancia estratégica para cada uno de los contrincantes “Oaxaca, Tabasco, México y Distrito Federal” aún no concluía el conteo, la suerte ya estaba echada y las cosas parecían inclinarse a favor de Madrazo.

Por último, el presidente de la CNDPI, Humberto Roque, en una conferencia de prensa realizada esa noche, subrayó la diferencia tan pequeña entre ambos contendientes y declaró: “Ellos ya tienen las actas y saben perfectamente quién lleva la ventaja; lo digo con toda claridad, ya tienen calculado cómo les va a pesar el cómputo nacional.” Y añadió: “hasta ahora los elementos llamados quejas no nos llevan al camino de una posible anulación [...] no hay elementos para suponerlo [...] no preveo ningún elemento de carácter legal que nos conduzca a reponer las votaciones”.⁴³ Roque aprovechó la ocasión para aclarar el asunto del retraso en el conteo de los sufragios en el Distrito Federal, entidad en la que los adversarios de Madrazo fincaban amplias esperanzas, y atribuyó tal retraso precisamente a los paredistas.⁴⁴ El mensaje no podía ser más claro.

Las denuncias, que ya parecen desplegado del PRD, las hacen para raspar la elección, porque nosotros ya ganamos”. *Reforma*, 27 de febrero de 2002.

Un día después, Murat se expresó en términos similares: los simpatizantes de Paredes “deben estar enojados con quienes se habían comprometido con ellos. Están preocupados porque no les salieron las cuentas alegres, les fallaron los militantes donde iban a ganar, simplemente no les dieron las expectativas de voto en el Estado de México, en Tamaulipas, en Puebla y en Durango [...] y a pesar de eso se necesitaron ocho estados para emparejar los votos que sacaron en el Estado de México”. *Reforma*, 1° de marzo de 2002.

⁴¹ *El Universal*, 27 de febrero de 2002.

⁴² *La Jornada*, 28 de febrero de 2002. El entonces gobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto, confirmó a este diario la realización de la reunión y el envío de dicha misiva.

⁴³ *La Jornada y Reforma*, 27 de febrero de 2002.

⁴⁴ Lo que sucedió en el Distrito Federal fue lo siguiente. Según Roque, los resultados del DF no fueron enviados para su cómputo en el registro nacional priista debido a que la comisión capitalina, coordinada por Zamora Bátiz (cercano al paredista Rodolfo Echeverría, coordinador de la campaña interna de Paredes), acordó verbalmente con los encargados distritales

De acuerdo con el procedimiento previsto, el miércoles 27 de febrero se realizó la sesión de cómputo nacional. A las 16 horas, por acuerdo de la comisión, Roque dio a conocer los resultados preliminares; éstos aún no eran definitivos, pues faltaba revisar las impugnaciones, pero mostraron el triunfo de la planilla Madrazo-Gordillo en 19 entidades federativas contra 11 donde triunfaba la fórmula Paredes-Guerrero. Esa noche, Madrazo y Gordillo, aún sin constancia de mayoría, se declararon ganadores. Entretanto, los paredistas anunciaron que, de ser necesario, solicitarían la intervención del IFE para dirimir la elección interna (propuesta que por cierto suscitó críticas internas), y algunos insinuaron que, si no se anulaban las casillas impugnadas por ellos, habría problemas en la sesión del CPN donde tomarían posesión de sus cargos los nuevos dirigentes.⁴⁵

La etapa de lo contencioso, en la que la subcomisión de legalidad⁴⁶ evaluaría la procedencia de las impugnaciones, se inició el 28 de febrero, cuando ambos adversarios presentaron la documentación respectiva.⁴⁷ Los dos primeros días de marzo, esa subcomisión se reunió para revisar dichas impugnaciones. Aunque todavía la subcomisión no había emitido su dictamen, desde el viernes 1 de marzo, Carlos Jiménez Macías, uno de los principales voceros de Madrazo, ya se había reunido con Celso Humberto

que los paquetes se concentraran en los comités distritales y en los centros de acopio, y tomaron la decisión de no correr riesgos trasladándolos ese día y llevarlos hasta el martes para no hacer dos movimientos.

Los paredistas argüían que los paquetes electorales habían llegado el domingo en la noche a la comisión del Distrito Federal para el proceso interno y que ésta había iniciado el conteo de actas, pero que, al llegar casi al 15%, un grupo de priistas exaltados pasaron por enfrente de las oficinas donde se realizaba el conteo y, temiendo un asalto, la comisión determinó suspenderlo y resguardar los paquetes. Según los paredistas, sus representantes votaron en contra, pero esta decisión procedió. El conteo del Distrito Federal quedó pues en suspenso. *Reforma*, 26 de febrero de 2002, y *Milenio*, 27 de febrero de 2002.

⁴⁵ Según algunos, la intención de los paredistas era lograr, de un modo o de otro, la anulación de la elección y allanarle el camino a Murillo Karam, en ese momento secretario general, para ocupar interinamente la presidencia del partido e incluso encargarse de coordinar el proceso de elección de candidatos para los comicios federales de 2003. Sin embargo, por los acontecimientos posteriores, y por la actitud tomada por Beatriz Paredes en el sentido de acatar los resultados de la elección, esta versión parece poco probable.

⁴⁶ La subcomisión estaba presidida por Martha Tamayo, paredista y senadora por el Estado de México; también la componían Carlos Chaurand, Sadot Sánchez, la diputada Claudia Esqueda y el coordinador jurídico del CEN, Eduardo Escobedo.

⁴⁷ El equipo de Paredes, encabezado por Salvador Rocha, presentó su recurso de queja para impugnar 835 mesas receptoras situadas en Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Guerrero y el sur de Veracruz, las cuales significaban 290 520 votos que, si se anulaban, darían la victoria a Paredes. En contrapartida, el equipo de Madrazo, encabezado por Marco Tulio Ruiz, hizo lo propio e impugnó 834 mesas, para tratar de anular la elección en el Estado de México, Hidalgo, Distrito Federal y Tlaxcala.

Delgado, secretario técnico del CPN, para preparar la toma de protesta de Madrazo y Gordillo. El 3 de marzo, la mencionada subcomisión aprobó y turnó el dictamen a la CNDPI para su aprobación.⁴⁸ A las diez y media de la noche, Roque dio a conocer el dictamen que declaraba la validez del proceso; la fórmula Madrazo-Gordillo fue proclamada ganadora, después de que la comisión, por ocho votos contra uno, declaró válida la elección interna del PRI realizada el 24 de febrero; acto seguido se entregó la constancia de mayoría al representante de Madrazo, Héctor Hugo Olivares. El análisis detallado de esos resultados se abordará en la tercera parte de este trabajo.

Otros hechos reforzaron la idea de que la decisión de reconocer la victoria de Madrazo y Gordillo, y de que no habría marcha atrás en el proceso interno, había sido adoptada desde el lunes 25 por la noche o muy temprano el martes 26, es decir, antes de que sesionase la subcomisión de legalidad. Ya desde el 28 de febrero, aceptando implícitamente su derrota, Paredes sostuvo un encuentro con su estructura de campaña, y ahí informó a sus seguidores que ya se había reunido con Madrazo esa mañana, pues ambos estaban preocupados por mantener la unidad del partido, y les aseguró que ellos eran una corriente en el interior del PRI que tenía la mitad del mismo, por lo que platicaría con Madrazo para buscar la proporcionalidad de cargos, e hizo un llamado a la unidad; sin embargo, reiteró que pelearía sus impugnaciones. Por otra parte, en una actitud que reflejaba ya la aceptación del triunfo de Madrazo y Gordillo, el gobernador de Puebla, quien había apoyado a Paredes, hizo un llamado para apoyar a Madrazo; entretanto el de Tabasco, también madracista, promovía el respaldo al ganador; por su parte, el de Hidalgo, favorable a Paredes, llamó a cerrar filas en el PRI; en tanto que el gobernador de Colima instó a aceptar los resultados.⁴⁹

⁴⁸ De los nueve miembros que integraban la CNDPI, cinco aprobaron el dictamen de la subcomisión de legalidad que estableció la validez de la elección interna (Humberto Roque, presidente de la comisión, los representantes del sector obrero y del popular, el representante de los jóvenes y el representante de la fórmula Madrazo-Gordillo); los otros cuatro (los representantes del sector campesino, de las mujeres, del movimiento territorial, así como el representante de la planilla Paredes-Guerrero) votaron en contra. *La Jornada*, 4 de marzo de 2002.

Sólo se anularon 33 casillas (10 364 votos), pues la subcomisión de legalidad no consideró que hubiese causas graves que justificaran la anulación del proceso interno, y no se anularon más casillas por falta de pruebas, en particular en Oaxaca. En total, se descontaron 6 018 votos a Madrazo y 4 346 a Paredes.

Cabe señalar, además, que en el cómputo nacional global, los votos nulos sumaron 149 838, pues también se incluían aquellos sufragios anulados, por diferentes motivos, en las mesas receptoras al momento del conteo.

El resultado efectivo final fue de 1 518 063 votos para el ganador y 1 446 217 para la perdedora. El total de sufragios emitidos fue 3 134 118 y la votación válida, de 2 984 280.

⁴⁹ *Reforma*, 1° de marzo de 2002.

El mediodía del lunes 4 de marzo, en las oficinas de la Fundación Miguel Alemán, se reunieron 15 gobernadores priistas (sólo faltaron José Murat y Juan Millán), con la nueva dirección nacional electa y, a propuesta del gobernador Arturo Montiel, acordaron un pacto de unidad para impedir fracturas en el PRI, agruparse en torno del nuevo presidente del partido e iniciar un trabajo de acercamiento entre ambos bandos en sus respectivos estados; pero también se señaló que el éxito de esa tarea dependía de que Madrazo adoptara una actitud incluyente.⁵⁰ Por la noche, después de la toma de posesión, Madrazo y Gordillo sostuvieron una reunión con una parte de los gobernadores que acudieron a la toma de protesta de los nuevos dirigentes.

A las 17 horas del 4 de marzo, en el enorme estacionamiento de la sede nacional del PRI,⁵¹ se realizó una concentración para la toma de posesión de Madrazo y Gordillo, durante la ceremonia conmemorativa del 73 aniversario de la fundación del partido; fue un acto masivo clásico del PRI. Muy destacable resultó, dado el contexto de la semana precedente, la presencia y las declaraciones de Beatriz Paredes en la toma de protesta a Madrazo y Gordillo. En esa ocasión, Paredes afirmó: “yo acato el dictamen de la comisión, pero no comparto el esquema como se dio la elección”. Al día siguiente, luego de reasumir su cargo en la Cámara de Diputados, frente a 70 legisladores que la apoyaron, expuso la necesidad de evitar los enfrentamientos internos y de mantener unida la fracción priista para no perder influencia.⁵² La actitud asumida por Paredes y la disciplina de sus seguidores son un factor que debe ser subrayado, y permite comprender cómo la existencia de cierto tipo de políticos dentro del partido ha contribuido a su continuidad organizativa.⁵³

También desde el 5 de marzo, ambos equipos se reunieron para negociar la integración del CEN del PRI. Los nombres de sus nuevos miembros se dieron a conocer una semana más tarde. Entre los nombramientos⁵⁴ más

⁵⁰ *El Universal*, 5 de marzo de 2002.

⁵¹ Al enterarse Madrazo de que la delegación del Distrito Federal pensaba cuestionar la validez de la elección y boicotear la toma de posesión, de última hora dio instrucciones para que dicho acto se realizara fuera del auditorio Plutarco Elías Calles, como se había previsto originalmente, y no sólo con el CPN presente, sino agregando muchos contingentes más. Francisco Cárdenas Cruz, columna “Pulso Político”, *El Universal*, 6 de marzo de 2002.

⁵² *Reforma*, del 4 al 6 de marzo de 2002.

⁵³ *La Jornada* publicó, el 5 de marzo de 2002, una anécdota ilustrativa: “Al final de los discursos [de la toma de posesión], y cuando la nueva clase política que ahora controla el PRI abandonaba el edificio de Insurgentes Norte, a Manuel *El Meme* Garza González se le preguntó: —¿Por qué no se fueron del partido? —Es que afuera hace mucho frío— se sacudió *El Meme*.”

⁵⁴ La relación más detallada y completa de los nombramientos que se hicieron dentro del PRI a partir de ese día apareció publicada en *El Universal*, el 13 y el 14 de marzo de 2002.

significativos estuvieron, de entre los colaboradores de Madrazo, el de María Esther Sherman como secretaria de Organización, el de Felipe Solís Acero como secretario general adjunto, el de Rigoberto Quintero como secretario de Administración y Finanzas, el de Manlio Fabio Beltrones en la Secretaría Técnica del CPN y el de Héctor Hugo Olivares como nuevo titular de la CNDPI. Respecto de los colaboradores de Paredes, destacan los nombramientos de César Augusto Santiago, como secretario de Elecciones, y el de Rodolfo Echeverría en quien recayó la conducción de la Fundación Colosio. No fue un reparto que representase proporcionalmente el equilibrio de fuerzas que se expresó en la elección, pero, al fin y al cabo, sí se abrieron espacios al bando derrotado.

TERCERA PARTE. LAS CLAVES DE LA VICTORIA DE MADRAZO Y GORDILLO

1. Los resultados de la elección de dirigentes

Los acontecimientos políticos ocurridos dentro del PRI, a partir del 2 de julio de 2000 y hasta la toma de protesta de sus nuevos dirigentes el 4 de marzo de 2002, aportan elementos que nos permiten identificar los principales integrantes de cada bando y establecer de manera aproximada su preponderancia en la lucha interna por el control de la dirección nacional del partido; esto, sin minimizar las naturales ambiciones individuales que desata la lucha por el poder, sobre todo en una clase política tan imbuida de pragmatismo como lo es la priista. Para tener una idea, aunque sea aproximada, de los alineamientos de los principales personajes políticos, especialmente los gobernadores, en torno de cada uno de los dos bandos, se utilizaron los datos dados a conocer por medio de diversas notas informativas y columnas políticas publicadas en la prensa de aquellos días.⁵⁵

Del lado de Paredes se enlistaron 11 gobernadores, 23 senadores, 123 diputados federales y 14 dirigentes estatales, así como, de la estructura corporativa del partido, las cúpulas nacionales de los sectores obrero y agrario, y de los movimientos territorial y de las mujeres; en el sector popular, esta

⁵⁵ De la multitud de notas y columnas publicadas por la prensa en torno del proceso interno del PRI, se puede compilar información dispersa a este respecto. También hubo notas que sistematizaron información de varios días; entre estas últimas, cabe destacar las siguientes: la de Félix Fuentes, "En la Línea", *El Universal*, 17 de enero de 2002; la de *La Jornada*, del 11, 12 y 13 de enero de 2002; las aparecidas en *El Universal* el 15 de enero y el 28 de febrero de 2002; y la columna "Itinerario Político" de Ricardo Alemán del día 23 de febrero de ese mismo año.

fórmula fue apoyada por la poderosa FSTSE (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado); sin embargo, cabe hacer notar que en el caso de la CNC (Confederación Nacional Campesina), cuna política de Paredes, las preferencias de esta organización estaban divididas e incluso apoyaron la planilla contraria en estados importantes, como sucedió, por ejemplo, en Veracruz. Además, los labastidistas, que simpatizaban con Beatriz Paredes, ocupaban las plazas fuertes del aparato partidario (en toda la estructura del CEN y en el CPN) porque eran parte de su legado zedillista; hay que recordar que, luego de la postulación de Labastida como candidato presidencial del PRI, Zedillo había colocado a numerosos personajes afines a ambos en el aparato del partido, empezando por la presidenta del CEN, Dulce María Sauri, y Esteban Moctezuma, que asumió la Secretaría General.⁵⁶

Del lado de la planilla Madrazo-Gordillo, se enfilaron seis gobernadores, 29 senadores, 75 diputados federales y 12 presidentes de comités directivos estatales. En la estructura sectorial, contaron con el apoyo de la mayor parte del sector popular, que había estado bajo la dirección de Gordillo durante los últimos cinco años y del cual formaba parte el poderosísimo SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), también bajo la autoridad política de Gordillo; asimismo, tuvieron el respaldo de una parte del sector agrario y de las organizaciones juveniles. Dada esta aparente asimetría de fuerzas, se trata de comprender concretamente por qué, a pesar de ello, la mancuerna Madrazo-Gordillo logró imponerse sobre sus adversarios, en particular frente al fuerte grupo de gobernadores que los secundaban.

El primer factor de poder interno en las nuevas circunstancias parecieron ser los gobernadores. Por el lugar que habían ocupado en el anterior mapa de poder interno priista y por la lógica del modelo organizativo originario del partido, que lo había subordinado al titular del Poder Ejecutivo federal, los gobernadores parecían ser sus potenciales sucesores más inmediatos.⁵⁷ Además, de una o de otra manera, los gobernadores habían influido en la selección de los candidatos a diputados federales de mayoría relativa, que eran los que más directamente representaban los intereses locales y mantenían un importante control sobre sus respectivos comités

⁵⁶ Aquí hay que aclarar que la estructura de la coordinación de la campaña electoral de Labastida funcionaba de forma paralela al partido.

⁵⁷ El nuevo peso político de los gobernadores se vería ratificado durante la renovación parcial del CPN a principios de febrero de 2002, donde, por acuerdo de la XVIII Asamblea, todos los gobernadores priistas pasaron a formar parte de dicho organismo. *La Jornada*, 4 de febrero de 2002.

directivos estatales del partido, lo cual, supuestamente, les confería las riendas para dirigir las diferentes fuerzas locales vinculadas al PRI. Sin embargo, esto no siempre ocurrió así, y hubo algunas excepciones, como el caso del gobernador Juan Millán.⁵⁸

En enero de 2002, al inicio de la contienda interna por la dirección nacional del partido, el PRI gobernaba en 17 entidades federativas. Los gobernadores de éstas se repartían entre ambos bandos: los mandatarios de Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Guerrero y Sinaloa, a favor de Madrazo; por otro lado, los de Veracruz, San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Puebla, Durango, Tamaulipas, Colima, Hidalgo y Estado de México, a favor de Paredes. Este alineamiento se había venido perfilando al menos desde los últimos años de la administración de Zedillo. Luego, durante los tormentosos días y meses que vivió la clase política priista después de su derrota en julio de 2000, se profundizó la brecha que separaba estos dos bandos. Ulteriormente, durante la preparación y la realización de la XVIII Asamblea General de Delegados, estas dos alas se decantaron ya muy claramente y la elección interna de la dirección nacional cristalizó aún más esta división. A lo largo de estas etapas de la vida del partido, los gobernadores priistas fueron desempeñando un rol cada vez más activo y abierto.

Las 15 entidades federativas restantes estaban gobernadas por partidos adversarios del PRI. Baja California, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Morelos, Nayarit y Yucatán, por el PAN; Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, el Distrito Federal y Michoacán, por el PRD; los primeros cuatro de estos cinco gobernantes perredistas eran todos de origen priista y, de ellos, los tres primeros se habían desprendido recientemente del PRI al no ser postulados por él como candidatos a gobernador y habían optado por contender bajo las siglas del PRD. Por último, en el caso de Chiapas, triunfó una amplia coalición de partidos abanderada por el PRD y el PAN, pero cabe señalar que, de acuerdo con los procesos locales anteriores y posteriores a la elección de gobernador en 2001, tendía a predominar el PRD; por esta razón, en el análisis que se presentará en el siguiente apartado, asignamos al gobernador electo, quien también era un ex priista recientemente separado del partido, la afiliación del PRD.

Estas entidades federativas, gobernadas por partidos diferentes del PRI, plantean el problema de la emergencia de un nuevo factor, de peso cre-

⁵⁸ Este mandatario, aunque simpatizaba con Madrazo, no logró alinear las fuerzas locales de ese estado a favor de su candidato, debido a que los labastidistas, que apoyaban a Paredes, se mantenían muy fuertes en la entidad, pues Labastida había sido gobernador de Sinaloa y había movilizado hasta la última tuerca del aparato priista durante la elección interna de 1999, cuando acaparó allí 89.2% de los votos emitidos, situación que lo dejó con una gran capacidad para influir.

ciente, en la dinámica política interna del PRI: la existencia de un conjunto de diputados federales priistas de mayoría relativa que no quedaban sometidos al control de un gobernador también priista, así como de un grupo de comités directivos estatales que se encontraban en esa misma situación. Esto abre una perspectiva interesante al análisis, pues estos componentes del variado retablo partidario eran aparentemente *huérfanos* políticos, situación que precisamente los hizo volver la cara ya fuese hacia el aparato central del partido, aún dominado por el bando de los labastidistas que apoyaban a Paredes, o hacia los grupos disidentes, según los casos, pero lo importante es que su búsqueda de nuevos vínculos de lealtad organizativa ya no estaba orientada tanto hacia los titulares del aparato gubernamental (presidente o gobernador), sino al partido.

Hasta aquí, se aprecia cómo la relación de fuerzas entre ambas planillas favorecía, por lo menos en el nivel de gobernadores, cúpulas y aparato (quizá el término *nomenclatura* sea aplicable), a Beatriz Paredes. De ahí derivó para Madrazo y su grupo afín la necesidad de hacer una alianza con Elba Esther Gordillo, la poderosa líder del sindicato magisterial, cuyo aparato abarcaba todo el país, para poder ganar terreno en los estados bajo mandatarios priistas favorables a Paredes, y dar la batalla en aquellas entidades con gobernadores provenientes del PAN o del PRD, y donde, por lo mismo, los comités directivos estatales se encontraban debilitados y con posiciones inciertas ante ambos contendientes.

La confrontación por la dirección nacional fue una exigente prueba para medir fuerzas y ver quién mostraba mayor eficacia para movilizar a las bases priistas, ya fuese porque se contaba con el control del aparato partidario o con el de las maquinarias corporativas, o bien porque se lograba articular alianzas con grupos descontentos a causa de lo que había venido sucediendo en el PRI desde los años noventa. La elección interna de los dirigentes nacionales del PRI de febrero de 2000 fue el instrumento para revelar realmente cuál era la correlación de fuerzas entre ambos bandos; en este sentido, los resultados de dicho proceso sirven para completar el panorama y constituyen, sin lugar a dudas, los datos más reveladores e interesantes.

Mucho se habló en aquellos días de los métodos tradicionales utilizados por ambos bandos para movilizar a los votantes priistas, pero los ataques más severos se dieron entre los contendientes mismos, quienes se hicieron acusaciones mutuas de acarreo, clientelismo, etc. En este sentido, las cifras resultantes de la elección interna son un indicador de cuál era la capacidad de uno y otro para utilizar los métodos de campaña y movilización de que el PRI siempre se había valido en los comicios regulares para elegir legisladores y titulares de cargos ejecutivos en todos los niveles. Los métodos empleados en el proceso interno eran los típicos del PRI, refleja-

ban lo que éste siempre había sido; pero lo novedoso fue el cambio de fines u objetivos perseguidos con ellos, es decir, emplearon esos métodos para zanjar una contienda interna por la dirección nacional el partido.

De acuerdo con los resultados del portal del PRI en internet, en total se emitieron 3 134 118 sufragios, de los cuales se anularon 1 498 338; 1 518 063 se contabilizaron a favor del equipo Madrazo-Gordillo y 1 466 217 a favor del de Paredes-Guerrero, la diferencia entre ambos fue de 51 846 votos. Si se observan los datos del cuadro 1, en Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Yucatán la ventaja de los primeros fue superior a 20 000 sufragios; en el Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal y Durango, la ventaja de los segundos fue superior a ese mismo umbral; en los estados restantes, el diferencial absoluto entre ambos fue inferior a dicho umbral. A nivel nacional, si sólo se toma en cuenta el total de la votación válida emitida a favor de ambas planillas, los vencedores obtuvieron 50.9% de la misma y los derrotados 49.1%, una diferencia de 1.8%. La fórmula ganadora obtuvo sus más altas votaciones absolutas en dos estados bajo su influencia, Oaxaca y Tabasco, y en dos bajo la influencia opositora, Veracruz y México. Estos cuatro estados contribuyeron con 36.7% de la votación total a favor de los madracistas y 31.6% de la obtenida por los paredistas.

CUADRO 1
Votación en la elección interna del PRI en 2002
por planilla ganadora y por diferencia en votos absolutos

<i>Entidad</i>	<i>Madrazo- Gordillo</i>	<i>Paredes- Guerrero</i>	<i>Nulos</i>	<i>Total</i>	<i>Diferencia absoluta</i>	<i>Partido del gobernador</i>
Entidades federativas donde triunfó la fórmula Madrazo-Gordillo						
Oaxaca	175 464	23 850	8 328	207 642	151 614	PRI
Tabasco	121 498	7 190	4 013	132 701	114 308	PRI
Chiapas *	82 490	32 448	5 755	120 693	50 042	PRD*
Guerrero	78 104	33 008	5 018	116 130	45 096	PRI
Yucatán	67 133	27 776	5 465	100 374	39 357	PAN
Quintana Roo	24 905	7 496	1 266	33 667	17 409	PRI
Nayarit	30 396	14 311	2 094	46 801	16 085	PAN
Campeche	24 098	9 423	1 893	35 414	14 675	PRI
Veracruz	149 078	135 813	15 090	299 981	13 265	PRI
Nuevo León	47 522	38 014	4 134	89 670	9 508	PAN
Baja California	16 924	10 876	1 485	29 285	6 048	PAN
Guanajuato	34 471	28 787	4 213	67 471	5 684	PAN
Aguascalientes	15 145	10 748	1 531	27 424	4 397	PAN
Sinaloa	40 399	38 425	2 893	81 717	1 974	PRI
Zacatecas	17 321	16 053	1 665	35 039	1 268	PRD

CUADRO 1 (conclusión)

Michoacán	36 487	35 570	3 363	75 420	917	PRD
Baja California Sur	6 415	5,991	444	12 850	424	PRD
San Luis Potosí	34 615	34 276	3 214	72 105	339	PRI
Querétaro	11 260	11 092	1 346	23 698	168	PAN
Subtotal	1 013 725	521 147	73 210	1 608 082	492 578	

Entidades federativas donde triunfó la fórmula Paredes-Guerrero

Chihuahua	27 283	28 226	2 827	58 336	-943	PRI
Morelos	24 840	26 624	1 860	53 324	-1 784	PAN
Sonora	38 864	48 526	3 073	90 463	-9 662	PRI
Coahuila	52 010	62 428	7 696	122 134	-10 418	PRI
Jalisco	54 220	66 090	5 788	126 098	-11 870	PAN
Colima	9 704	22 964	1 566	34 234	-13 260	PRI
Durango	25 200	50 245	3 949	79 394	-25 045	PRI
Distrito Federal	44 064	72 812	5 789	122 665	-28 748	PRD
Tlaxcala	8 695	38 234	1 642	48 571	-29 539	PRD
Puebla	43 543	77 911	6 666	128 120	-34 368	PRI
Hidalgo	28 094	70 061	4 753	102 908	-41 967	PRI
Tamaulipas	37 396	84 931	5 535	127 862	-47 535	PRI
México	110 425	296 018	25 484	431 927	-185 593	PRI
Subtotal	504 338	945 070	76 628	1 526 036	-440 732	

* Coalición PRD-PAN-PT-PVEM. Se asignó al PRD por el contexto electoral del estado. Gobernador expriista.

Fuente: portal del Partido Revolucionario Institucional en internet, consultado en marzo de 2002 y datos de la autora.

En el mismo cuadro 1, se muestran los resultados ordenados por planilla ganadora y de acuerdo con la diferencia absoluta entre la votación de ambas planillas. La encabezada por Madrazo triunfó en 19 estados, de los cuales ocho estaban gobernados por el PRI y once por el PAN o el PRD; del total de sufragios válidos en este conjunto, esta misma planilla atrajo a 66.0% de los electores, es decir, a dos tercios. Por su parte, la fórmula liderada por Paredes triunfó en 13 entidades federativas, de las cuales nueve estaban gobernadas por el PRI y cuatro por otro partido; pero, a pesar de contar con una mayor proporción de entidades con gobernador priista, este equipo sólo alcanzó a reunir 50.8% del subtotal agregado de votos en este grupo de estados, es decir, la mitad. Estos resultados sugieren que la votación reunida a favor Madrazo no dependió tanto, como parecía, del apoyo de los gobernadores priistas, o en mucho menor proporción que la de su contrincante Beatriz Paredes.

2. *El peso de los gobernadores, de las organizaciones
y de la estructura partidaria*

Con el fin de analizar con mayor detalle las implicaciones político-organizativas de estos resultados finales de la elección interna de dirigentes del PRI, en el cuadro los hemos ordenado en función de dos criterios: el primero responde a la filiación del gobernador en funciones (por partido y por bando interno en el PRI), y el segundo a la magnitud de la diferencia, en sentido decreciente, entre la votación relativa de la planilla ganadora y la de la perdedora (los porcentajes se calcularon en relación con la votación válida total en cada entidad federativa).

En todos los casos del grupo de estados con gobernador del PRI favorable a Madrazo, éste último resultó triunfante con muy holgada diferencia (especialmente en Tabasco y Oaxaca). La excepción fue Sinaloa, donde su margen de ventaja fue muy estrecho, debido a que los grupos labastidistas que apoyaban a Paredes en la entidad aún eran fuertes, lo que debilitó el peso del gobernador. En general, se puede decir que los gobernadores comprometidos con Madrazo cumplieron su cometido, asegurándole en conjunto una ventaja de casi cuatro a uno.

En los 11 estados con mandatarios priistas que apoyaron a Paredes, esta última resultó ganadora en nueve de ellos. El Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y Coahuila fueron sus baluartes, pero perdió por una diferencia menor en San Luis Potosí y en Veracruz; de modo tal que, en conjunto, en este grupo Paredes se impuso con una ventaja de poco más de dos a uno.

Sin embargo, cabe destacar lo ocurrido en dos estados clave por su magnitud demográfica y, por lo mismo, de gran peso en la vida interna priista. El primero de ellos es Veracruz, donde cerradamente triunfó la mancuerna Madrazo-Gordillo, a pesar de que el gobernador Miguel Alemán estuvo siempre alineado con el bando paredista; el segundo es el Estado de México; ahí, aunque el gobernador Montiel pudo asegurar la victoria de la fórmula Paredes-Guerrero con una amplia ventaja, ello no obstó para que sus contrincantes cosecharan más de cien mil votos, que estratégicamente resultaron muy importantes dado el estrecho margen que separó a ambas planillas en el resultado nacional final.

En los nueve estados bajo gobernador panista, la situación se resolvió muy favorablemente para Madrazo-Gordillo, quienes lograron imponerse en siete, con amplia ventaja en cuatro de ellos (Yucatán, Nayarit, Baja California y Aguascalientes); mientras que en los dos casos en los que perdieron (Morelos y Jalisco) lo hicieron con una diferencia inferior a los diez puntos porcentuales. De las seis entidades federativas con gobernador del

CUADRO 2
 Resultados absolutos y relativos de la votación interna del PRI, febrero de 2002.
 Datos por entidades federativas clasificadas por filiación partidaria del gobernador

Entidad federativa	Voto absoluto Madrazo (a)	Voto absoluto Paredes (b)	Votación válida (a) + (b)	Voto relativo Madrazo (c)	Voto relativo Paredes (d)	Diferencia relativa (c) - (d)	Nombre del gobernador del PRI
Con gobernador priista favorable a Madrazo-Gordillo							
Tabasco	121 498	7 190	128 688	94.4%	5.6%	88.8%	Manuel Andrade
Oaxaca	175 464	23 850	199 314	88.0%	12.0%	76.1%	José Murat Kasab
Quintana Roo	24 905	7 496	32 401	76.9%	23.1%	53.7%	Joaquín Hendricks
Campeche	24 098	9 423	33 521	71.9%	28.1%	43.8%	Antonio González Curi
Guerrero	78 104	33 008	111 112	70.3%	29.7%	40.6%	René Juárez Cisneros
Sinaloa	40 399	38 425	78 824	51.3%	48.7%	2.5%	Juan Millán
Con gobernador priista favorable a Paredes-Guerrero							
Veracruz	149 078	135 813	284 891	52.3%	47.7%	4.7%	Miguel Alemán
San Luis Potosí	34 615	34 276	68 891	50.2%	49.8%	0.5%	Fernando Silva Nieto
Chihuahua	27 283	28 228	55 509	49.2%	50.8%	-1.7%	Patricio Martínez
Coahuila	52 010	62 428	114 438	45.4%	54.6%	-9.1%	Enrique Martínez
Sonora	38 864	48 526	87 390	44.5%	55.5%	-11.1%	Armando López Nogales
Puebla	43 543	77 911	121 454	35.9%	64.1%	-28.3%	Melquiades Morales
Durango	25 200	50 245	75 445	33.4%	66.6%	-33.2%	Ángel Sergio Guerrero Mier
Tamaulipas	37 396	84 931	122 327	30.6%	69.4%	-38.9%	Tomás Yarrington
Colima	9 704	22 964	32 668	29.7%	70.3%	-40.6%	Fernando Moreno Peña
Hidalgo	28 094	70 061	98 155	28.6%	71.4%	-42.8%	Manuel Ángel Núñez Soto
México	110 425	296 018	406 443	27.2%	72.8%	-45.7%	Arturo Montiel

CUADRO 2 (conclusión)

Entidad federativa	Voto absoluto		Votación válida (a) + (b)	Voto relativo		Diferencia relativa (c) - (d)	Nombre del gobernador del PRI
	Madrazo (a)	Paredes (b)		Madrazo (c)	Paredes (d)		
Con gobernador panista							
Yucatán	67 133	27 776	94 909	70.7%	29.3%	41.5%	
Nayarit	30 396	14 311	44 707	68.0%	32.0%	36.0%	
Baja California	16 924	10 876	27 800	60.9%	39.1%	21.8%	
Aguascalientes	15 145	10 748	25 893	58.5%	41.5%	17.0%	
Nuevo León	47 522	38 014	85 536	55.6%	44.4%	11.1%	
Guajuato	34 471	28 787	63 258	54.5%	45.5%	9.0%	
Querétaro	11 260	11 092	22 352	50.4%	49.6%	0.8%	
Morelos	24 840	26 624	51 464	48.3%	51.7%	-3.5%	
Jalisco	54 220	66 090	120 310	45.1%	54.9%	-9.9%	
Con gobernador perredista							
Chiapas*	82 490	32 448	114 938	71.8%	28.2%	43.5%	
Zacatecas	17 321	16 053	33 374	51.9%	48.1%	3.8%	
Baja California Sur	6 415	5 991	12 406	51.7%	48.3%	3.4%	
Michoacán	36 487	35 570	72 057	50.6%	49.4%	1.3%	
Distrito Federal	44 064	72 812	116 876	37.7%	62.3%	-24.6%	
Tlaxcala	8 695	38 234	46 929	18.5%	81.5%	-62.9%	

* Coalición PRD-PAN-PT-PVEM. Se asignó al PRD por el contexto electoral del estado. Gobernador exproista.
Fuente: cuadro elaborado por la autora con los datos del cuadro 1 y datos propios.

PRD, Madrazo se impuso, por apretada diferencia, en Zacatecas, Baja California Sur y Michoacán, y en Chiapas se colocó muy por delante de su contrincante, mientras que Paredes triunfó con gran ventaja en las otras dos, el Distrito Federal y particularmente en Tlaxcala,⁵⁹ su estado de origen.

En el cuadro 3, se presentan las estadísticas agregadas de cada uno de estos cuatro grupos de casos. En los estados con gobernador priista favorable a Madrazo, éste obtuvo 79.6% de los votos y Paredes 20.4%; en los estados con gobernador priista favorable a Paredes, ésta obtuvo 62.1% de los sufragios y su adversario 37.9%; como se aprecia, la ventaja de Madrazo en el primer grupo es mucho mayor que la que alcanza Paredes en el segundo grupo; sin embargo, dado el mayor peso demográfico de éste último, al sumarse los votos obtenidos por ambas planillas en todo el conjunto de estados bajo gobernador del PRI, Paredes saca a Madrazo una pequeña ventaja, de alrededor de 10 000 votos equivalentes a cuatro décimas porcentuales.

CUADRO 3
Resultados agregados absolutos y relativos
de la elección interna de dirigentes del PRI por grupos
de entidades federativas clasificadas por filiación política del gobernador

<i>Grupo de entidades federativas</i>	<i>Voto absoluto Madrazo (a)</i>	<i>Voto absoluto Paredes (b)</i>	<i>Votación válida (c) = (a) + (b)</i>	<i>Voto relativo Madrazo (d) = (a)/(c)</i>	<i>Voto relativo Paredes (e) = (b)/(c)</i>	<i>Diferencia relativa (f) = (d) - (e)</i>
con gobernador del PRI favorable a Madrazo	464 468	119 392	583 860	79.6%	20.4%	59.2%
con gobernador del PRI favorable a Paredes	556 212	911 399	1 467 611	37.9%	62.1%	-24.2%
Subtotal con gobernador del PRI	1 020 680	1 030 791	2 051 471	49.8%	50.2%	-0.5%
con gobernador del PAN	301 911	234 318	536 229	56.3%	43.7%	12.6%
con gobernador del PRD	195 472	201 108	396 580	49.3%	50.7%	-1.4%
Subtotal con gobernador del PAN o del PRD	497 383	435 426	932 809	53.3%	46.7%	6.6%

Fuente: datos del cuadro 2.

⁵⁹Según Félix Fuentes, Paredes ayudó a Alfonso Sánchez Anaya como contendiente del PRI por la candidatura al gobierno de Tlaxcala a conquistar ese cargo, pero bajo las siglas del PRD, por lo que se le imputaba a ella la derrota del priista Joaquín Cisneros. Columna "En la Línea", *El Universal*, 15 de enero de 2002. Presumiblemente, esto le aseguró el apoyo del gobernador.

El panorama resulta diferente en los estados bajo gobiernos provenientes de partidos diferentes del PRI; en el grupo de estados con gobernador panista, la ventaja de Madrazo es indiscutible, 56.3% contra 43.7%, mientras que en las entidades con mandatario perredista la situación se saldó con un empate virtual, 49.3% para Madrazo y 50.7% para Paredes. El mayor peso demográfico de las entidades bajo gobierno panista hizo que, en el agregado total de estos dos últimos grupos de casos, la fórmula Madrazo-Gordillo resultase vencedora al reunir 53.3% de los votos contra 46.7% de sus opositores.

En resumen, en los estados con gobernador priista ambos contendientes empataron, sin bien la planilla encabezada por Paredes obtuvo una pequeña ventaja; en los estados con gobernador perredista, también aparece un empate global; el verdadero desempate a favor de la fórmula Madrazo-Gordillo ocurrió en las entidades federativas bajo una administración del PAN, es decir, ahí donde no existía un gobernador para coordinar las filas priistas locales en beneficio de uno u otro contrincante.

En el cuadro 4, se presenta una clasificación de las entidades federativas por filiación partidaria del gobernador y por planilla ganadora, que resume gráficamente la situación antes descrita. De hecho, ese cuadro pone claramente de relieve cómo, en la victoria de la planilla Madrazo-Gordillo, es mayor el número de estados donde se imponen sin el apoyo político de un gobernador priista, ya fuese porque el ejecutivo local pertenecía a otro partido o bien porque apoyaba a sus adversarios. También ilustra cómo el peso de la mayoría de los gobernadores priistas se inclinaba a favor de la fórmula Paredes-Guerrero, pero dos de ellos no lograron asegurar la victoria de sus favoritos.

CUADRO 4

Clasificación de las entidades federativas por filiación del gobernador y por planilla vencedora en la elección interna de 2002

<i>Filiación del gobernador</i>	<i>Gana Madrazo-Gordillo</i>	<i>Gana Paredes-Guerrero</i>
Con gobernador del PRI favorable a Madrazo-Gordillo	Tabasco Oaxaca Quintana Roo Campeche Guerrero Sinaloa	
Con gobernador del PRI favorable a Paredes-Guerrero	Veracruz San Luis Potosí	Chihuahua Coahuila

CUADRO 4 (conclusión)

<i>Filiación del gobernador</i>	<i>Gana Madrazo-Gordillo</i>	<i>Gana Paredes-Guerrero</i>
		Sonora Puebla Durango Tamaulipas Colima Hidalgo México
Con gobernador del PAN	Yucatán Nayarit Baja California Aguascalientes Nuevo León Guanajuato Querétaro	Morelos Jalisco
Con gobernador del PRD	Zacatecas Baja California Sur Michoacán Chiapas	Distrito Federal Tlaxcala

Fuente: cuadro elaborado por la autora con los datos del cuadro 1 y datos propios.

En el cuadro 5, hemos traducido a cifras la situación anterior, sumando la totalidad de votos obtenidos por ambos contendientes en cada uno de los cuatro grupos de estados clasificados por filiación del gobernador, pero desglosando, esta vez, los resultados por planilla ganadora en el respectivo conjunto de entidades federativas (las del cuadro 4). Los números resultantes son elocuentes: del total de votos obtenido a nivel nacional por la mancuerna vencedora, 30.6% provinieron de estados con gobernador priista favorable a Madrazo, 36.6% de estados con gobernador priista favorable a Paredes, 19.9% se captó en los estados con gobernador panista y 12.9% en estados bajo mandatario perredista. Dicho en forma simple y coloquial, Madrazo le debía su llegada a la presidencia nacional del PRI a tres fuentes: una tercera parte a los gobernadores que lo apoyaron, pero las otras dos terceras partes se pueden atribuir a los votos acopiados con la ayuda del SNTE y de organizaciones corporativas locales descontentas con sus cúpulas nacionales, así como de los movilizados por una buena parte de los comités directivos estatales “huérfanos”.

En contraste con ello, la radiografía del apoyo a la candidatura de Beatriz Paredes y Javier Guerrero muestra que, del total de votos a su favor, 62.2% provinieron de estados donde contaban con el apoyo del gobernador priista y 29.7% los obtuvieron en entidades federativas gobernadas por el PAN o el PRD, mientras que en los estados de gobernador madracista sólo recabaron 8.1% de sus sufragios. Es decir, el alineamiento sobre el que se apoyaron reflejó claramente su dependencia con respecto a un importante bloque de gobernadores priistas.

CUADRO 5

Composición del voto nacional en la elección de dirigentes del PRI en 2002
Grupos de entidades federativas clasificadas por filiación política del gobernador

	<i>Estados donde gana Madrazo</i>	<i>Estados donde gana Paredes</i>	<i>Votación válida</i>
	Cifras absolutas		
Estados con gobernador a favor de Madrazo-Gordillo	464 468	119 392	583 860
Estados con gobernador a favor de Paredes-Guerrero	556 212	911 399	1 467 611
Subtotal de estados con gobernador priista	1 020 680	1 030 791	2 051 471
Estados con gobernador del PAN	301 911	234 318	536 229
Estados con gobernador del PRD	195 472	201 108	396 580
Subtotal de estados con gobernador no priista	497 383	435 426	932 809
Total nacional	1 518 063	1 466 217	2 984 280
	Composición relativa (porcentaje vertical respecto al total nacional)		
Estados con gobernador a favor de Madrazo	30.6%	8.1%	19.6%
Estados con gobernador a favor de Paredes	36.6%	62.2%	49.2%
Subtotal de estados con gobernador priista	67.2%	70.3%	68.7%
Estados con gobernador del PAN	19.9%	16.0%	21.8%
Estados con gobernador del PRD	12.9%	13.7%	9.4%
Subtotal de estados con gobernador no priista	32.8%	29.7%	31.3%
Total nacional	100.0%	100.0%	100.0%

Fuente: cuadro calculado por la autora con los datos del cuadro 1 y datos propios.

Estos datos sugieren que la existencia de un buen número de estados sin gobernador del PRI «hecho derivado de la intensificación de la competencia electoral en los últimos años y de los cambios en el régimen electo-

ral» fue un factor importante en el triunfo de los grupos encabezados por Madrazo y Gordillo. La red de alianzas que aseguró la victoria de los nuevos dirigentes se tejió en torno de estructuras partidarias estatales (en particular, los comités directivos estatales huérfanos), organizaciones sindicales nacionales (notablemente el SNTE) y de algunas fuerzas locales (gobernadores y organizaciones sectoriales).

CONCLUSIÓN

El PRI se consolidó como un partido caracterizado por su dependencia a una fuente de autoridad externa, el titular del Poder Ejecutivo federal. La cascada de lealtades, ordenada hacia la cúspide ocupada por el presidente de la república, se impuso sobre la jerarquía formal del organigrama de poder inscrito en los estatutos partidarios; así, las relaciones discrecionales de autoridad prevalecieron entre los distintos niveles de las instancias internas. A escala local, este esquema se reprodujo, pero encabezado por los gobernadores de los estados, quienes se situaban en un segundo círculo de la autoridad política del país. Otra característica distintiva del PRI fue el carácter heterogéneo de sus componentes internos (individuos y organizaciones de diversa índole) y, por ende, de su estructura organizativa (territorial y corporativo-sectorial). Estos dos rasgos organizativos, aunados a su larga permanencia en el poder, hicieron de él un partido con débil institucionalización interna.

Este perfil del PRI inhibió, aunque no por completo, su autonomía de acción para emprender los cambios en la estructura necesarios para adaptarla a las nuevas circunstancias que surgieron en la arena político-electoral en la década de los años ochenta. Paradójicamente, tuvo la fuerza suficiente para resistir las reformas partidarias que quiso imponer el entonces presidente Salinas y, más tarde, para limitar la facultad de Zedillo para designar libremente al candidato del PRI a la presidencia de la república. Pero el PRI, o al menos sus militantes más convencidos de la necesidad de una reforma partidaria, no se atrevieron a ir más lejos. Por lo mismo, fue una organización política en la que el cambio interno fue impuesto más bien por las circunstancias externas, por su derrota en la elección de julio de 2000. Desde luego que, al menos desde 1988 hasta 2000, se habían acumulado numerosas tensiones internas en el PRI y, sobre todo, entre éste y las élites gubernamentales; pero lo que desencadenó el avance del proceso de institucionalización organizativa interna del PRI fueron los cambios en los términos de la contienda electoral y el incremento del grado de competitividad en el sistema de partidos. Sólo la derrota de su candidato presidencial orilló a los priistas a tomar sus decisiones más cruciales por cuenta propia.

En algunos países también hubo partidos en el poder con bajo nivel de institucionalización interna, pero que resultaron barridos por los acontecimientos en cuanto se modificaron las circunstancias que hacían posible su existencia como organización política; lo sorprendente en el caso del PRI es que logró sobrevivir al cataclismo que le significó el 2 de julio de 2000 y que no se ha desmoronado, al menos hasta ahora. ¿Qué lo sostuvo? Se pueden mencionar muchos factores: los recursos financieros públicos y legales que recibía a través del IFE, gracias al peso electoral que aún tenía; la existencia de gobernadores priistas en funciones; los intereses de sus organizaciones sectoriales; la influencia de sus fracciones parlamentarias; el peso de fuerzas de tipo "territorial" que conservaban firmes lazos de identificación con el partido; el arraigo que conservó entre importantes franjas del electorado; los vínculos de identificación de muchos militantes con el partido. Pero también hay un factor subjetivo que no debe ser subestimado: la capacidad de sus pragmáticas élites para construir mecanismos de negociación, para pactar compromisos internos y para establecer nuevas reglas del juego, con el fin de seguir en condiciones de luchar por el poder.

Así, el PRI, luego de haber perdido los comicios para elegir presidente de la república en julio de 2000, pudo realizar exitosamente, por primera vez en su historia, una contienda interna para elegir a sus dirigentes, el presidente y el secretario general del CEN, ya sin la injerencia de un presidente de la república priista. Bajo esas condiciones, el triunfo de Madrazo-Gordillo, al menos coyunturalmente, estimuló el despunte de una mayor institucionalización interna del PRI, pero sólo en lo que respecta a la creación de redes de lealtades partidarias donde ya no predomina tanto la fuerza de personajes políticos cuya fuente de poder dentro del partido reside en el hecho de ocupar un elevado cargo en la administración pública, es decir, más allá de las fronteras organizativas del partido mismo.

En efecto, los resultados de ese proceso sugieren que el PRI logró fortalecer su institucionalización interna, pues pudo tomar, sin fracturas organizativas, una decisión que habitualmente había sido determinada en gran medida por una fuente externa, el titular del Poder Ejecutivo federal. También apunta en ese sentido el hecho de que los sucesores naturales para llenar ese vacío, los gobernadores priistas, se dividieron entre los dos bandos contendientes para ocupar la dirección nacional del PRI, y que su apoyo sólo contribuyó parcialmente a la victoria de la fórmula ganadora, la de Madrazo y Gordillo. Esto relativizó, aunque no eliminó, el peso de los gobernadores como fuente externa de autoridad en el PRI.

Desde otra perspectiva, los acontecimientos revisados permiten afirmar que el incremento de la competitividad electoral interpartidaria también contribuyó a una relativa autonomización de las estructuras priistas

locales, pues, al ser derrotados varios candidatos del PRI en los comicios para elegir gobernador, los comités directivos estatales correspondientes vieron crecer su margen de acción e, incluso, aun cuando se encontraban debilitados y desgastados por la derrota electoral, se vieron obligados a establecer una nueva forma de articulación con el partido y con sus cúpulas nacionales, lo que en diversos casos fortaleció la lealtad hacia el partido en sí mismo.

Sin embargo, en contrapartida de lo anterior, ese incipiente proceso de fortalecimiento de su institucionalización interna se enfrenta a factores, inherentes al perfil organizativo heredado por el PRI actual, que dificultan su avance y obstaculizan su reestructuración a fondo, y que le imprimen a su proceso de cambio un carácter contradictorio. El primero de esos factores es que la mayor parte de los gobernadores priistas ha logrado mantener su influencia sobre los comités directivos estatales respectivos. En segundo lugar, aún no se han homogeneizado sus normas de funcionamiento interno y subsisten los márgenes de discrecionalidad de que gozan sus dirigentes en los distintos niveles. En tercer lugar, la persistencia de la heterogeneidad organizativa de sus componentes principales, estructura territorial y sectores. A la luz de los acontecimientos recientes, el primero y el tercer factor son los que más han contribuido al surgimiento de sus conflictos internos recientes e influido, de modo contradictorio, sobre el desarrollo de la lealtad partidaria. Aunque el análisis de la vida interna del PRI posterior a elección de dirigentes de 2002 rebasa los objetivos del presente ensayo, pues es un tema que en sí mismo amerita un tratamiento aparte, vale la pena mencionar brevemente algunos puntos.

Con respecto a la cuestión del peso del poder de los gobernadores dentro de la estructura del PRI, hemos visto que ya desde 2001 se había perfilado claramente un grupo de ellos (seguidores antes de Zedillo y luego de Labastida), bautizado como oficialista, que se opuso a la corriente encabezada por Madrazo, la disidente, que también incluía a gobernadores, pero en menor número. Lo interesante fue que, ya desde los debates de la XVIII Asamblea, en noviembre de 2001, los primeros sostuvieron una visión regionalizadora del PRI que sólo podía fortalecer el poder de los gobernadores, mientras que los segundos buscaron fortalecer las estructuras partidarias nacionales. Como ya lo hemos visto, estos dos bandos son los que se enfrentaron por el control de la dirección nacional del PRI en febrero y marzo de 2002. En suma, los acuerdos alcanzados en la XVIII Asamblea y la realización de la elección interna del PRI fueron acontecimientos que contribuyeron a impulsar parcialmente el proceso de institucionalización interna del PRI, pero sólo en parte, porque los gobernadores conservaron un importante margen de influencia dentro de dichos procesos.

Más adelante, en enero de 2005, ese mismo grupo oficialista se alió, bajo el nombre de Unidad Democrática (UD), mejor conocido como “Tucom” (todos unidos contra Madrazo). Sus objetivos inmediatos eran influir sobre las decisiones de la XIX Asamblea Nacional –la cual fue convocada para establecer las reglas para elegir al candidato a la presidencia de la república y tratar de resolver el problema de la sustitución de Madrazo en el cargo de presidente del CEN, cuando renunciase a él para contender por la candidatura presidencial– y preparar un terreno favorable para participar con un precandidato propio en dicho proceso, que se realizó, a final de cuentas, hasta noviembre de 2005. El mecanismo que adoptó este grupo para elegir a su precandidato, en agosto de ese año, más bien tendió a favorecer un fortalecimiento parcial de la institucionalización interna; pero, de nueva cuenta, la autoridad de los gobernadores derivaba precisamente de sus respectivos cargos públicos y, por lo mismo, tenía un efecto desinstitucionalizador.

Sin embargo, quizá sea la heterogeneidad organizativa del PRI el factor que produce los efectos contradictorios más palpables sobre su institucionalización interna. Al desaparecer la autoridad presidencial dentro partido, los dos componentes de la amalgama priista, organizaciones y estructura territorial, perdieron su factor de cohesión. Además, a lo largo del periodo 2000-2005, las posiciones de los dirigentes sectoriales del PRI oscilaron de un bando al otro, en tanto que las posiciones del grupo madracista se fortalecieron en el interior de la estructura territorial del partido. Estos reacomodos internos de las élites priistas pasaron a ser una fuente de inestabilidad y de división.

Esto tal vez no significó un peligro excesivo de inestabilidad y desunión en el caso de las cúpulas obreras y agrarias, ni en el de las organizaciones de mujeres y de jóvenes, ni probablemente en el de la mayor parte de las populares; pero algo muy diferente sucedió en el caso de un poderoso sindicato vinculado a los servicios públicos gubernamentales: el SNTE, cuyo peso político dentro del grupo dirigente del PRI se había incrementado mucho después de 2002, por las razones que hemos analizado en la tercera parte de este trabajo. Aun cuando es cierto que formalmente está incorporado al sector popular de la componente corporativa del PRI, también lo es que ese sindicato, o más bien, su dirigente prácticamente vitalicia, Elba Esther Gordillo, tiene su propia agenda política y su propio poder organizativo, autónomo con respecto al PRI y su dirección nacional.

Nada mejor que la alianza de Gordillo y Madrazo, en 2002, encarnó la heterogeneidad organizativa del PRI. Los desencuentros y conflictos entre ambos, más que la mera confrontación de sus respectivas ambiciones personales, son fundamentalmente el resultado de lógicas organizativas diferentes y de sus distintas visiones estratégicas de cómo debe luchar el PRI por

el poder. Los primeros problemas se vislumbraron ya a principios de 2003, cuando Gordillo se autoproclamó futura líder de la fracción priista en la Cámara, y luego cuando abiertamente infringió los estatutos partidarios al ser diputada federal y secretaria general al mismo tiempo, sin que se aplicaran medidas correctivas. No sólo eso, sino que además, una vez instalada en su cargo legislativo y como líder de fracción, tejió, a espaldas de los diputados priistas, acuerdos con el presidente Vicente Fox, lo que le valió su destitución como líder de la fracción en la Cámara. Gordillo exacerbó aún más los ánimos en su contra cuando apoyó a candidatos a gobernador pero de partidos que contendían en contra del PRI y, más tarde, cuando promovió la formación del partido Nueva Alianza, a través de sindicato que encabeza.

Al acercarse la coyuntura de la sucesión presidencial, a inicios de 2005, la líder real del SNTE cambió el sentido de sus apuestas políticas: a pesar de su larga ausencia en el partido durante 2004, quiso sustituir a Madrazo en el cargo de presidente del CEN del PRI, vía el famoso orden de prelación estatutario, y orientó sus alianzas a favor del grupo de gobernadores UD-Tucom. Las numerosas animadversiones dentro del PRI en contra suya y la fuerte influencia que ya para entonces había acumulado Madrazo en el CPN y en la estructura del partido, obligaron a Gordillo, en agosto de 2005, a renunciar a sus aspiraciones de controlarlo. El conflicto desembocó en la confrontación abierta entre ambos rivales, Madrazo y Gordillo, y sometió a una elevada presión al partido y al proceso interno de selección de candidato presidencial realizado en el otoño de 2005. Los ataques de Gordillo a Madrazo, ya como candidato electo del PRI, pusieron a la orden del día la eventual expulsión de aquélla y sus seguidores, una ruptura sumamente costosa para el PRI en tiempos electorales, en caso de darse.

Todos estos conflictos, derivados de la heterogeneidad organizativa del PRI, han contrabalanceado los avances parciales que había logrado en su institucionalización interna, durante los últimos años, sobre todo en cuanto a construir mecanismos de toma de decisiones para llenar el vacío dejado por la ausencia de un presidente de la república priista. Y aún quedan por resolver los problemas que se deriven del resultado de la elección federal de 2006, que la gane o la pierda, en cualquiera de esos escenarios, el partido tendrá que reacomodar y mantener su vida organizativa interna. Hasta ahora, puede decirse que, sopesando los eventos del pasado reciente, la balanza parece inclinarse muy levemente a favor de la institucionalización interna del PRI, pues hasta ahora ha logrado superar los diferentes problemas que se le han venido planteando, lo que, en sí, puede constituir un elemento que retroalimente su cohesión organizativa. Sin embargo, la incertidumbre es sumamente alta.

La tercera etapa del partido de la revolución se cerró en julio de 2000. Los acontecimientos ocurridos de entonces a la fecha y los que sucedan de 2006 en adelante son los que, en conjunto, determinarán si lo que estamos presenciando es el inicio de su cuarta etapa organizativa o si simplemente constituye el epílogo de la historia del partido fundado por Calles.

FUENTES CONSULTADAS

A. BIBLIOGRAFÍA

- Alarcón, Víctor (1995), "El PRI en la presidencia de Carlos Salinas de Cortari. Un balance sexenal," *Estudios Políticos*, 4ª época, núm. 6, enero-marzo, pp. 1-45.
- Baer, Delal (1993), "Mexico's Second Revolution: Pathways to Liberalization", en Riordan Roett (ed.), *Political and Economical Liberalization in México. At a Critical Juncture?*, Boulder y Londres, Lynne Rienner Publishers, pp. 51-68.
- Collier, Ruth y David Collier (1991), *Shaping the Political Arena. Critical Juncture, the Labor Movement and Regime Dynamics in Latin America*, New Jersey, Princeton University Press.
- Córdova, Arnaldo (1972), *La formación del poder político en México*, México, Ediciones Era.
- Cornelius, Wayne (1999), "Subnational Politics and Democratization: Tension between Center and Periphery in the Mexican Political System", en W. Cornelius *et al.*, *Subnational Politics and Democratization in Mexico*, San Diego, University of California, pp. 3-16.
- Cornelius, Wayne y Ann Craig (1991), *The Mexican Political System in Transition*, Monograph Series 35, San Diego, University of California.
- Cornelius, Wayne, Judith Gentleman y Peter Smith (1989), "The Dynamics of Political Change in Mexico", en Wayne Cornelius, Judith Gentleman y Peter Smith (eds.), *Mexico's Alternative Political Futures*, Monograph Series 30, San Diego, University of California, pp. 1-51.
- Corona, Gabriel (2003), "La selección de los dirigentes nacionales del priismo", en F. Reveles (coord.), *Partido Revolucionario Institucional: crisis y refundación*, México, UNAM / Gernika, pp. 153-220.
- Crozier, Michel y Erhard Friedberg (1977), *L'acteur et le système. Les contraintes de l'action collective*, Paris, Éditions du Seuil.
- Furtak, Robert (1978), *El partido de la revolución y la estabilidad política en México*, México, FCPS-UNAM.
- González, Miguel y Leonardo Lomelí (2000), *El partido de la revolución. Institución y conflicto (1928-1999)*, México, FCE.
- González Casanova, Pablo (1981), "El partido del Estado y el sistema político", en P. González Casanova, *El Estado y los partidos políticos en México*, México, Ediciones Era, pp. 28-82.
- Hernández, Rogelio (1991), "La reforma interna y los conflictos del PRI", *Foro Internacional*, vol. XXXII, núm. 2, octubre-diciembre, México, El Colegio de México, pp. 222-249.

- Hernández, Rogelio (1998), "The Partido Revolucionario Institucional", en Mónica Serrano, *Governing Mexico: Political Parties and Elections*, Londres, University of London, pp. 71-94.
- Hernández, Rogelio (2000), "La historia moderna del PRI. Entre la autonomía y el sometimiento", *Foro Internacional*, vol. XL, núm. 2, abril-junio, México, El Colegio de México, pp. 278-306.
- Langston, Joy (2002), "Los efectos de la competencia electoral en la selección de candidatos del PRI a la Cámara de Diputados", en Carlos Elizondo y Benito Nacif (comps.), *Lecturas sobre el cambio político en México*, México, CIDE/FCE, pp. 387-430 (artículo publicado antes en 1998).
- Medina, Luis (1979), *Civilismo y modernización del autoritarismo, tomo 20 de la Historia de la Revolución mexicana*, México, El Colegio de México.
- Medina, Luis (1994), *Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1993*, México, FCE.
- Meyer, Lorenzo (1989), "Democratization of the PRI: Mission Impossible?", en W. Cornelius et al., *Mexico's Alternative Political Futures, op. cit.*, pp. 325-348.
- Pacheco, Guadalupe (2002), "La redefinición de las reglas internas de poder en el PRI, 1988-2001. De la XIV a la XVIII Asamblea Nacional", *Argumentos*, núm. 43, diciembre, México, UAM-X, pp. 107-152.
- Pacheco, Guadalupe (2003), "El PRI ante la pérdida del poder", *Veredas. Revista del pensamiento sociológico*, año 4, núm. 7, segundo semestre, México, UAM-X, pp. 101-130.
- Pacheco, Guadalupe (2004), "La reestructuración organizativa del PRI, 2000-2003", *Veredas. Revista del pensamiento sociológico*, año 5, núm. 9, segundo semestre, México, UAM-X, pp. 139-157.
- Pacheco, Guadalupe y Juan Reyes (1987), "La distribución de candidatos a diputados en el PRI (1979-1985)", *Argumentos*, núm. 2, noviembre, México, UAM-X, pp. 47-65.
- Pacheco, Guadalupe y Juan Reyes (1989), "La estructura sectorial del PRI y las elecciones federales de diputados, 1979-1988", *Sociológica*, núm. 11, septiembre-diciembre, México, UAM-A, pp. 59-74.
- Pacheco, Guadalupe y Juan Reyes (1998), "Cambios en la representación política: la Cámara de Diputados en México", *Argumentos*, núm. 31, agosto, México, UAM-X, pp. 21-38.
- Panbianco, Angelo (1993), *Modelos de partido*, México, Alianza Universidad.
- Pempel, T. J. (1991), "Introducción", en T. J. Pempel (comp.), *Democracias diferentes. Los regímenes con un partido dominante*, México, FCE, pp. 7-42.
- Reveles, Francisco (2003a), "PRI: crisis y refundación", en F. Reveles (coord.), *Partido Revolucionario Institucional: crisis y refundación*, México, UNAM/Gernika, pp. 9-38.
- Reveles, Francisco (2003b), "La estructura de un partido corporativo en transformación", en F. Reveles (coord.), *Partido Revolucionario Institucional: crisis y refundación, op. cit.*, pp. 41-77.
- Reveles, Francisco (2003c), "La lucha entre fracciones priistas en la selección de candidatos presidenciales", en F. Reveles (coord.), *Partido Revolucionario Institucional: crisis y refundación, op. cit.*, pp. 79-151.

B. PUBLICACIONES DEL PRI DE CARÁCTER HISTORIOGRÁFICO

- Osorio, Miguel (1993), *Presidentes de México y dirigentes del partido*, México, Coordinación de Estudios Históricos y Sociales del CEN del PRI.
- Partido Revolucionario Institucional (1991), *Historia gráfica del Partido Revolucionario Institucional*, México, PRI-Fundación Cambio XXI.
- Partido Revolucionario Institucional (1991), *PNR, PRM, PRI. Actas constitutivas. Documentos básicos*, México, Secretaría de Información y Propaganda del CEN del PRI.
- Partido Revolucionario Institucional (1993), *Los presidentes del Partido Revolucionario Institucional, 1929-1993*, México, PRI-Fundación Cambio XXI.

C. DOCUMENTOS OFICIALES DEL PRI

- Documentos básicos*, México, Secretaría de Divulgación Ideológica del CEN del PRI, 1987.
- Memoria documental, XIV Asamblea Nacional. Septiembre de 1990*, México, Secretaría de Información y Propaganda del CEN del PRI, 1990.
- Documentos básicos*, México, Secretaría de Información y Propaganda del CEN del PRI, 1990.
- Reglamento del Consejo Político Nacional*, México, Secretaría Técnica del CPN, 1991.
- XVI Asamblea Nacional. Proyectos que presenta el Comité Ejecutivo Nacional*, México, CEN del PRI, 1993.
- Documentos básicos*, México, CEN del PRI, 1993.
- Agenda para la reforma del PRI. Propuesta*, México, Comisión Nacional de Ideología del PRI, 1994.
- XVII Asamblea Nacional. Crónica y memoria*, México, CEN del PRI, 1996.
- Documentos básicos*, México, CEN del PRI, 1996.
- Documentos básicos*, México, CEN del PRI, 2001.

D. HEMEROGRAFÍA

- La República*, publicación semanal del CEN del PRI.
- Examen*, publicación mensual del CEN del PRI.
- La Jornada*.
- El Universal*.
- Reforma*.